



FUNDACIÓN
ESTATAL PARA
LA PREVENCIÓN
DE RIESGOS
LABORALES, F.S.P.

INFORMADO POR LA ABOGACÍA
DEL ESTADO EN EL MEYSS, CON
NÚMERO DE REFERENCIA: PA 1/2018 CON
FECHA 04/Julio de 2018

APROBADO POR LA DIRECCIÓN
DE LA FEPL
FECHA 21/11/2018

**PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS
PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN
DE SERVICIOS POR PROCEDIMIENTO ABIERTO
O ABIERTO SIMPLIFICADO**

001-18PCAP

Capítulo presupuestario: Segundo

OBJETO DEL CONTRATO

**CONTRATACIÓN DE APOYO AL DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE
LA PLATAFORMA GESTOR DE ACCIONES Y EL MANTENIMIENTO DE LOS
SISTEMAS INFORMÁTICOS**

(De 15 de enero de 2019 a 15 de enero de 2020).

CORREO ELECTRÓNICO

fundacion@funprl.es

1

CP001/2018 - CONTRATACIÓN DE APOYO AL DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA GESTOR DE ACCIONES Y
EL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS DE LA FEPL

(De 15 de enero de 2019 a 15 de enero de 2020).

C/Príncipe de Vergara,
108, 2ª Planta

28002 MADRID

Teléf.: 91 535 89 15

Fax: 91 363 43 27.



FUNDACIÓN
ESTATAL PARA
LA PREVENCIÓN
DE RIESGOS
LABORALES, F.S.P.

CORREO ELECTRÓNICO

fundacion@funprl.es

2

CP001/2018 - CONTRATACIÓN DE APOYO AL DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA GESTOR DE ACCIONES Y
EL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS DE LA FEPRL

(De 15 de enero de 2019 a 15 de enero de 2020).

C/Príncipe de Vergara,
108, 2ª Planta

28002 MADRID

Teléf.: 91 535 89 15

Fax: 91 363 43 27.



INDICE

Página

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN.	5
CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS:	6
1.- Disposiciones Generales:	6
1.1.- Régimen jurídico prerrogativas de las Administración y jurisdicción competente.	6
1.2.- Objeto del contrato.	8
1.3.- Necesidad administrativa e idoneidad del contrato.	8
1.4.- Presupuesto de licitación y precio del contrato.	8
1.5.- Financiación del contrato.	9
1.6.- Órgano de Contratación y perfil del contratante.	9
2.- Licitación:	9
2.1.- Capacidad para contratar y criterios de valoración para la adjudicación del contrato	12
2.2.- Presentación de proposiciones.	13
2.3.- Garantía provisional.	14
2.4.- Forma y contenido de las proposiciones.	14
2.5.- Acreditación, en su caso, de la representación.	16
2.6.- Acreditación de la solvencia económica, financiera y técnica o profesional de las empresas o, en su caso, la clasificación.	17
2.7.- Declaración responsable de no estar incurso el licitador en las prohibiciones para contratar.	18
2.8.- Las empresas extranjeras	19
2.9.- Documentación acreditativa de las circunstancias relativas a la personalidad jurídica	19
2.10.- Compromiso de constitución de Unión Temporal de Empresas (UTE).	19
2.11.- Acreditación de hallarse al corriente de pago del Impuesto de Actividades Económicas (IAE).	19
2.12.- Empresas vinculadas o pertenecientes a un mismo grupo de empresas.	19
2.13.- Apertura y examen de las proposiciones.	20
2.13.1.- Documentación personal y documentación acreditativa de la clasificación o de la solvencia económica, financiera y técnica o profesional	20
2.13.2.- Apertura de documentación sobre la oferta.	20
3.- Adjudicación y formalización del contrato:	22

3.1.- Clasificación de las ofertas y propuesta de adjudicación.	22
3.2.- Efectos de la no presentación en plazo de la documentación justificativa del cumplimiento de requisitos previos.	25
3.3.- Garantía definitiva.	25
3.4.- Renuncia a la celebración del contrato y desistimiento del procedimiento de adjudicación por la Administración.	26
3.5.- Adjudicación del contrato y notificación de la adjudicación.	26
3.6.- Formalización del contrato y publicidad.	27
3.7.- Anuncio de formalización de los contratos.	29
3.8.- Comunicación a los candidatos y licitadores.	30
4.- Ejecución del contrato:	30
4.1.- Principio de riesgo y ventura.	31
4.2.- Facultades de dirección e inspección de la Administración.	31
4.3.- Plazo de ejecución.	31
4.4.- Cumplimiento del plazo y penalidades por demora.	32
4.5.- Ejecución defectuosa y penalidades administrativas.	32
4.6.- Responsabilidad del contratista por daños y perjuicios.	33
4.7.- Modificación del contrato.	33
4.8.- Suspensión del contrato.	34
4.9.- Cesión del contrato.	35
4.10.- Subcontratación.	36
5.- Derechos y obligaciones de las partes:	38
5.1.- Abonos al contratista.	38
5.2.- Pagos a subcontratistas y suministradores.	38
5.3.- Condiciones especiales de ejecución del contrato. Obligaciones laborales, sociales y medioambientales.	39
5.4.- Seguridad y confidencialidad.	41
5.5.- Revisión de Precios	41
6.- Extinción del contrato:	43
6.1.- Realización de los servicios.	43



6.2.- Recepción de las prestaciones o servicios.	43
6.3.- Plazo de garantía.	43
6.4.- Devolución y cancelación de la garantía definitiva.	43
6.5.- Resolución del contrato.	44
6.6.- Efectos de la resolución del contrato	47
6.7.- Régimen de recursos.	47

DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA

HR.- Hoja Resumen del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (HR del PCAP o HR).

ANEXOS

- I.- Modelo de declaración responsable del cumplimiento de las condiciones exigidas legalmente para contratar con la Administración, conforme a los Arts. 140 y 141, de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público.
- II.- Modelo de declaración responsable relativa a no estar incursos en prohibiciones e incompatibilidades para contratar con la Administración y de estar al corriente en el cumplimiento de obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, conforme al Arts. 70 y 71, de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público.
- III.- Modelo de oferta económica para empresarios españoles.
- IV.- Modelo de oferta económica para empresarios no españoles de Estados miembros de la Unión Europea y del Espacio Económico Europeo.
- V.- Modelo de declaración responsable de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la seguridad social, con aportación de certificaciones.

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN.

El **contrato de servicios** objeto del presente pliego se adjudicará mediante **procedimiento abierto o abierto simplificado** al amparo de lo previsto en el Capítulo I, Sección 2ª, Subsección 2ª, del Título I, del Libro II, en aplicación de los Arts. 131, 156 a 159 y 308 a 315, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (en adelante LCSP), y tramitación ordinaria o urgente, conforme a los términos y requisitos establecidos en dicho texto.

El expediente de contratación podrá ultimarse, incluso con la adjudicación y formalización del contrato, aun cuando su ejecución, ya se realice en una o varias anualidades, deba iniciarse en el ejercicio siguiente. A estos efectos, podrán comprometerse créditos con las limitaciones que se determinen en las correspondientes normas presupuestarias.

La adjudicación y formalización del contrato queda sometida a la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones derivadas del contrato en el ejercicio correspondiente (Orden HAP/1357/2013).

CORREO ELECTRÓNICO

fundacion@funpr.es



CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS.

1.- DISPOSICIONES GENERALES:

1.1.- Régimen jurídico, prerrogativas de la Administración y jurisdicción.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (en adelante, LCSP), las fundaciones públicas, entre las que se encuentra la Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales, F.S.P, tienen la consideración de poderes adjudicadores no administraciones públicas, a efectos de lo dispuesto en dicha LCSP, por lo que es de aplicación el régimen de contratación previsto en la LCSP para los poderes adjudicadores que no tengan la condición de administración pública.

Por razón del importe, el presente contrato no se encuentra sujeto a regulación armonizada, ni por razón de importe, ni en relación con los criterios de adjudicación previstos en el pliego, ya que no existe ninguno evaluable mediante un juicio de valor que el veinticinco por ciento de la puntuación total.

El régimen de contratación de estos poderes adjudicadores no administraciones públicas se encuentra en los artículos 316 a 320 LCSP. El presente contrato, tiene carácter privado, si bien se someterá a la LCSP en cuanto a su preparación y adjudicación, quedando sometidos sus efectos y extinción al Derecho privado, salvo (artículos 26.3 y 319.1) en los aspectos relativos a la materia medioambiental, social o laboral (artículo 201), condiciones especiales de ejecución (artículo 202), modificación (artículos 203 a 205), cesión y subcontratación (artículos 214 a 217), racionalización técnica de la contratación (artículos 218 a 228), y causa de resolución consistente en la imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactadas, cuando no sea posible modificar el contrato conforme a los artículos 204 y 205 (artículo 211.1.g) y condiciones de pago (apartados 4º del artículo 198, del artículo 210 y 1º del artículo 243).

Por la naturaleza propia de un contrato de servicios, el mismo se regirá por el presente pliego de cláusulas administrativas particulares (PCAP), por el pliego de prescripciones técnicas particulares (PPT), por la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público (LCSP), por la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la facturación electrónica y creación del registro contable de facturas en el sector público, el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público y en cuanto no se oponga a lo establecido en la LCSP, por el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (RGLCAP), aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, y para las contrataciones que versen sobre asuntos relacionados con las tecnologías de la información y de la administración electrónica, por la Orden ESS/13557/2015 de 25 de junio, por la que se regulan la composición y funciones de la Comisión Ministerial de Administración Electrónica del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Con carácter supletorio se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado y sus normas de desarrollo.

Los licitadores y el contratista aceptan de forma expresa su sumisión a la legislación anteriormente citada, al pliego de prescripciones técnicas particulares (PPT), y al presente pliego de cláusulas administrativas particulares (PCAP), que con su Hoja Resumen (en adelante HR), y sus Anexos, tendrán

CORREO ELECTRÓNICO

fundacion@funprl.es



carácter contractual y serán, por tanto, de obligado cumplimiento.

El Órgano de Contratación ostenta las prerrogativas previstas en el Arts. 61, de la LCSP.

En relación con la exigencia de garantías, El artículo 114 LCPS mantiene el carácter potestativo de exigencia de garantías, tanto provisionales como definitivas, aclarando, en cuanto a la forma de garantía, que no será necesaria su constitución en la Caja General de Depósitos y, en cuanto al importe, que no podrán superarse los límites previstos en la LCSP.

Los contratos celebrados por los poderes adjudicadores (tengan o no la consideración de administraciones públicas) se perfeccionan con su formalización (artículo 36.1 LCSP).

Cuando estos contratos sean susceptibles de recurso especial en materia de contratación, dicha formalización deberá efectuarse en los plazos establecidos en el artículo 153 LCSP (artículo 37.3 LCSP).

En relación con las facultades de los poderes adjudicadores respecto de la modificación de los contratos, debemos distinguir entre:

- Modificaciones previstas en el PCAP.

Será de aplicación el artículo 204 LCPS. Ahora bien, es preciso recordar que al carecer la FEPR de potestad de autotutela, el derecho a exigir la modificación, en caso de oposición del contratista, obligará a la FEPR a ejercitar la oportuna acción ante la jurisdicción civil.

- Modificaciones no previstas en el PCAP.

Por remisión del artículo 319.1 LCSP, el régimen aplicable es el del artículo 205 LCSP.

El artículo 205 establece los supuestos en que puede modificarse el contrato sin contravenir las exigencias que comportan los principios de publicidad y concurrencia, de forma que de cumplir estas condiciones no será aplicable la causa de resolución del artículo 211.1. g) LCPS. De esta manera, si cumpliéndose cualquiera de los supuestos que, con arreglo al artículo 205, posibilitan la modificación del contrato, el poder adjudicador y el contratista acuerdan llevarla a término, no surgirá ninguna cuestión. Si el contratista no acepta la modificación, la FEPR no podrá exigirle la modificación del contrato, ya que la regla de la obligatoriedad de la modificación del contrato para el contratista que establece el artículo 206 no queda comprendida en la remisión que hace el artículo 319.1 párrafo primero.

Por último, señalar que son aplicables los límites del artículo 214.1.

A continuación, y en relación con la cesión, subcontratación, condiciones de pago, condiciones especiales de ejecución, obligaciones en materia medioambiental, social o laboral, racionalización técnica de la contratación., debemos afirmar que, aunque los contratos de la FEPR son contratos privados, quedan sujetos a determinados preceptos de la Ley en materia de efectos y extinción. Nos remitimos para ello a lo dispuesto en el artículo 319.

En relación con la Revisión de precios, será de aplicación el artículo 103 LCPS.

Seguidamente, y por lo que se refiere a las causas de resolución, el análisis se realiza desde el prisma del derecho privado:

- La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual no opera por sí sola la resolución del contrato (artículo 1.257 del Código Civil).
- La resolución del contrato por concurso del contratista sólo puede tener lugar en los términos dispuestos en el artículo 61.2 de la Ley Concursal.
- Se admite el mutuo acuerdo como causa de resolución.

- Con arreglo al artículo 1.124 del Código Civil, ha de ser causa de resolución del contrato el incumplimiento por el contratista de las obligaciones asumidas por el mismo (siempre que la obligación incumplida sea esencial y no accesorio). Igualmente lo sería el incumplimiento de una obligación por la entidad contratante.

- Al amparo del artículo 1.255 del Código Civil, puede estipularse como causa de resolución la demora por el contratista en el cumplimiento del plazo a partir de un determinado límite.

- Es causa de resolución en los contratos que celebre la FEPR como poder adjudicador no administración pública la prevista en el 319.2 LCSP.

Conforme al artículo 27.1. c) de la LCSP, la jurisdicción contencioso administrativa es competente para conocer de las cuestiones relativas a la preparación, adjudicación y modificaciones contractuales de los contratos celebrados por los poderes adjudicadores que no tengan la consideración de Administración Pública, cuando, en el caso de estas últimas, se entienda que se incumplen los artículos 204 y 2015 porque dicha modificación debió ser objeto de una nueva adjudicación.

La jurisdicción civil conocerá (artículo 27.2.a) de la LCSP) de las controversias que se susciten respecto de los efectos y extinción de los contratos privados de los poderes adjudicadores que no sean Administraciones Públicas, con excepción de las aludidas modificaciones contractuales.

1.2.- Objeto del Contrato.

El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego de cláusulas administrativas particulares (PCAP), es la prestación del servicio descrito en la hoja resumen (HR), y definidos en el pliego de prescripciones técnicas particulares (PPT), en el que se especifican las necesidades administrativas a satisfacer mediante el contrato y los factores de todo orden a tener en cuenta.

Al objeto del contrato corresponde la codificación relativa a la Nomenclatura de la Clasificación de Productos por Actividades (CPA), y, en su caso, la codificación relativa a la Nomenclatura del Vocabulario Común de los Contratos (CPV), que se detallan en la hoja resumen (HR).

1.3.- Necesidad administrativa e idoneidad del contrato a celebrar.

Las necesidades a satisfacer mediante el contrato son las contenidas en la hoja resumen (HR), del PCAP.

1.4.- Presupuesto base de licitación y precio del contrato.

El presupuesto base de licitación y, en su caso, su desglose en precios unitarios, asciende a la cantidad que figura en la HR del PCAP, distribuido en las anualidades previstas en el mismo. Su cálculo incluye todos los factores de valoración y gastos que, según los documentos contractuales y la legislación vigente son de cuenta del adjudicatario, así como los tributos de cualquier índole, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), que figura como partida independiente.

En el momento de elaborarlo, el órgano de contratación cuidará de que el presupuesto base de licitación sea adecuado a los precios del mercado. A tal efecto, el presupuesto base de licitación se desglosará indicando en el pliego de cláusulas administrativas particulares o documento regulador de la licitación los costes directos e indirectos y otros eventuales gastos calculados para su determinación. En los contratos en que el coste de los salarios de las personas empleadas para su ejecución forme parte del precio total del contrato, el presupuesto base de licitación indicará de forma desglosada y con



desagregación de género y categoría profesional los costes salariales estimados a partir del convenio laboral de referencia.

El precio del contrato será el que resulte de la adjudicación del mismo e incluirá, como partida independiente, el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), que en ningún caso superará el presupuesto base de licitación.

En el precio del contrato se considerarán incluidos los demás tributos, tasas y cánones de cualquier índole que sean de aplicación, así como todos los gastos que se originen para el adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el presente pliego y se abonará con cargo a las anualidades que se señalen en el de la hoja resumen (HR), del PCAP.

El sistema de determinación del precio aplicable a este contrato, que se formula en los términos establecidos en el Art. 100, de la LCSP, y Art. 197, del RGLCAP, se detalla en la HR.

El valor estimado del contrato, calculado conforme a lo previsto en el Art. 101, de la LCSP, es el que figura en la hoja resumen (HR).

1.5.- Financiación del contrato.

Se emitirá el correspondiente certificado de existencia de crédito adecuado y suficiente para atender las obligaciones económicas que se deriven para la Administración del contrato a que se refiere el presente pliego, el cual será financiado en su totalidad por los créditos que figuran en los Presupuestos Generales del Estado en las anualidades, programas y aplicaciones presupuestarias que se detallan en la hoja resumen del PCAP.

1.6.- Órgano de Contratación y perfil del contratante.

El Órgano de Contratación, es la Dirección de la Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales, F.S.P sito en la C/Príncipe de Vergara 108, 2ª Planta- 28002 Madrid - NIF: G-82354176 (ver HR), el cual difundirá la información relativa al presente contrato, de acuerdo con lo dispuesto en este PCAP y su HR, a través del perfil del contratante (Art. 63, LCSP) en su sitio web <https://www.funprl.es>, y de la Plataforma de Contratación del Estado (Art. 347, LCSP).

El Órgano de Contratación podrá designar un responsable del contrato, expresándolo así en la hoja resumen (HR), de conformidad con lo previsto en el Art. 62, de la LCSP.

2.- LICITACIÓN.

El procedimiento para la adjudicación del contrato se anunciará en la Plataforma de Contratación del Estado (PLACE), y en el Boletín Oficial del Estado (BOE), así como en el perfil del contratante de la FEPR. Cuando el contrato esté sujeto a regulación armonizada, la licitación se publicará, además, en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE). En caso de tramitación abierta simplificada, únicamente se publicará en el perfil del contratante del órgano de contratación, poniéndose a disposición de los interesados la documentación necesaria para la presentación de las ofertas.

Son contratos de servicios de regulación armonizada, conforme al Art.22 LCSP actualizado por la Orden HFP/1298/2017, de 26 de diciembre los de valor igual o superior a 144.000,00.- euros cuando los

CORREO ELECTRÓNICO

fundacion@funprl.es

contratos hayan de ser adjudicados por la Administración General del Estado, sus Organismos autónomos, o las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social, y aquellos de valor igual o superior a 221.000 euros, cuando los contratos hayan de adjudicarse por entidades del sector público distintas de la administración General del Estado, sus Organismos Autónomo o las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social. Igualmente lo son los de cuantía igual o superior a 750.000,00.- euros, cuando se trate de contratos cuyo objeto sean los servicios sociales u otros específicos enumerados en el Anexo IV, de la LCSP.

Si el procedimiento a aplicar en la adjudicación es el abierto simplificado, el anuncio de licitación se publicará exclusivamente en el perfil del contratante de esta Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales, F.S.P (FEPRL).

El importe máximo de los gastos de publicidad de licitación del contrato a que se refiere el Art. 135, de la LCSP, deberá ser abonado por el adjudicatario, el cual, de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 75, del RGLCSP, será el que corresponda según las tarifas vigentes en el Boletín Oficial del Estado.

En caso de varios adjudicatarios se distribuirán entre ellos el importe de los gastos de publicidad de licitación en proporción a los presupuestos indicativos de las adjudicaciones de cada uno, deduciéndose tales importes de la primera certificación o factura presentada por los adjudicatarios.

Si el procedimiento abierto en, su totalidad o alguno de sus lotes, resultaran desiertos, el importe de los gastos de publicidad correspondiente será por cuenta de la Administración.

Los pliegos y la documentación complementaria, podrán estar accesibles a través del perfil del contratante, de la Plataforma de Contratación del Estado (PLACE), o de cualquiera de los medios electrónicos, informáticos o telemáticos indicados en el presente pliego (PCAP). En este caso, el Órgano de Contratación no estará obligado a atender las solicitudes que le pudieran remitir los licitadores reclamando el envío de dicha documentación.

Para los actos de comunicación con el Órgano de Contratación, distintos de la presentación o anuncio del envío de las proposiciones, los licitadores tendrán en cuenta que las notificaciones o comunicaciones derivadas de la tramitación de los procedimientos de adjudicación del contrato a que se refiere la LCSP se realizarán exclusivamente por medios electrónicos mediante dirección electrónica habilitada o mediante comparecencia electrónica.

Los plazos desde la notificación se computarán desde la fecha de envío de la misma o del aviso de notificación, si fuera mediante comparecencia electrónica, siempre que el acto objeto de notificación se haya publicado el mismo día en el Perfil de contratante de esta Fundación. En caso contrario los plazos se computarán desde la recepción de la notificación por el interesado.

No obstante lo anterior, el requisito de publicidad en el perfil de contratante no resultará aplicable a las notificaciones practicadas con motivo del procedimiento de recurso especial por los órganos competentes para su resolución computando los plazos desde la fecha de envío de la misma o del aviso de notificación, si fuera mediante comparecencia electrónica.

No obstante, podrá utilizarse la comunicación oral para comunicaciones distintas de las relativas a los elementos esenciales de un procedimiento de contratación, siempre que el contenido de la comunicación oral esté suficientemente documentado. A este respecto, los elementos esenciales de un procedimiento de contratación incluyen: los pliegos de la contratación, las solicitudes de participación y las ofertas. En particular, las comunicaciones orales con los licitadores que puedan incidir sustancialmente en el contenido y la evaluación de las ofertas estarán documentadas de modo suficiente y a través de los medios adecuados, tales como los archivos o resúmenes escritos o sonoros



de los principales elementos de la comunicación.

La presentación de ofertas y solicitudes de participación se llevará a cabo utilizando medios electrónicos, de conformidad con los requisitos establecidos en la disposición adicional decimoquinta de la LCSP.

No obstante, los órganos de contratación no estarán obligados a exigir el empleo de medios electrónicos en el procedimiento de presentación de ofertas en los siguientes casos:

- a) Cuando, debido al carácter especializado de la contratación, el uso de medios electrónicos requeriría herramientas, dispositivos o formatos de archivo específicos que no están en general disponibles o no aceptan los programas generalmente disponibles.
- b) Cuando las aplicaciones que soportan formatos de archivo adecuados para la descripción de las ofertas utilizan formatos de archivo que no pueden ser procesados por otros programas abiertos o generalmente disponibles o están sujetas a un régimen de licencias de uso privativo y el órgano de contratación no pueda ofrecerlas para su descarga o utilización a distancia.
- c) Cuando la utilización de medios electrónicos requiera equipos ofimáticos especializados de los que no disponen generalmente los órganos de contratación.
- d) Cuando los pliegos de la contratación requieran la presentación de modelos físicos o a escala que no pueden ser transmitidos utilizando medios electrónicos.

Con respecto a los intercambios de información para los que no se utilicen medios electrónicos con arreglo al presente apartado, el envío de información se realizará por correo o por cualquier otro medio apropiado o mediante una combinación de correo o de cualquier otro medio apropiado y de medios electrónicos. En este caso, se indicará en un informe específico las razones por las que se haya considerado necesario utilizar medios distintos de los electrónicos.

Los órganos de contratación tampoco estarán obligados a exigir medios electrónicos en el proceso de presentación de ofertas cuando el uso de medios no electrónicos sea necesario bien por una violación de la seguridad de los antedichos medios electrónicos o para proteger información especialmente delicada que requiera un nivel tan alto de protección que no se pueda garantizar adecuadamente utilizando dispositivos y herramientas electrónicos de los que disponen en general los operadores económicos o de los que se pueda disponer a través de otros medios de acceso alternativos. En este caso, los órganos de contratación indicarán en un informe específico las razones por las que se haya considerado necesario utilizar medios distintos de los electrónicos.

Los órganos de contratación y los servicios dependientes de los mismos velarán por que en todas las comunicaciones, intercambios de información y operaciones de almacenamiento y custodia de información se preserven la integridad de los datos y la confidencialidad de las ofertas y las solicitudes de participación. Además, deberán garantizar que el contenido de las ofertas y de las solicitudes de participación no será conocido hasta después de finalizado el plazo para su presentación y hasta el momento fijado para su apertura.

Para contratos públicos de obras, de concesión de obras, de servicios y concursos de proyectos, y en contratos mixtos que combinen elementos de los mismos, los órganos de contratación podrán exigir el uso de herramientas electrónicas específicas, tales como herramientas de modelado digital de la información de la construcción (BIM) o herramientas similares. En esos casos, ofrecerán medios de acceso alternativos según lo dispuesto en el párrafo siguiente hasta el momento en que dichas herramientas estén generalmente disponibles para los operadores económicos.

Cuando sea necesario, los órganos de contratación podrán exigir la utilización de herramientas y

CORREO ELECTRÓNICO

fundacion@funpr.es

dispositivos que no estén disponibles de forma general, a condición de que ofrezcan medios de acceso alternativos. Se considerará que los órganos de contratación ofrecen medios de acceso alternativos apropiados cuando:

- a) Ofrezcan gratuitamente un acceso completo y directo por medios electrónicos a dichas herramientas y dispositivos a partir de la fecha de publicación del anuncio correspondiente o a partir de la fecha de envío de la invitación, en su caso. El texto del anuncio o de la invitación especificará la dirección de Internet en la que puede accederse a dichas herramientas y dispositivos, o bien,
- b) Garanticen que los licitadores que no tienen acceso a las herramientas y dispositivos de que se trate, o que no tienen la posibilidad de obtenerlos en el plazo fijado, siempre que la falta de acceso no pueda atribuirse al licitador en cuestión, pueden tener acceso al procedimiento de contratación utilizando mecanismos de acceso provisionales disponibles gratuitamente en línea; o bien,
- c) Admitan un canal alternativo para la presentación electrónica de ofertas.

Los medios electrónicos, informáticos y telemáticos utilizables deberán cumplir, además, los requisitos establecidos en la Disposición adicional decimosexta de la presente Ley

En aquellos contratos que impongan al adjudicatario la obligación de subrogarse como empleador en determinadas relaciones laborales, el Órgano de Contratación facilitará a los licitadores, en los términos previstos en el Art. 130, de la LCSP, la información sobre las condiciones de los contratos de los trabajadores a los que afecte la subrogación.

2.1.- Capacidad para contratar y criterios de valoración para la adjudicación del contrato.

Podrán concurrir a la adjudicación del presente contrato las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, de acuerdo con lo previsto en los Arts. 65 a 70, de la LCSP, y que cumplan con los requisitos establecidos en presente PCAP.

Los empresarios deberán contar, con la habilitación empresarial o profesional que, en su caso, se especifique en la HR de este PCAP, para la realización del objeto del contrato.

Cuando se trate de personas jurídicas, las prestaciones del contrato objeto del presente pliego, han de estar comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, conforme a sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

Las personas físicas o jurídicas de Estados no pertenecientes a la Unión Europea, deberán reunir además, los requisitos establecidos en el Art. 68 (Empresas no comunitarias), de la LCSP, y las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, deberán sujetarse a lo dispuesto en el Art. 67 (Empresas comunitarias), de la misma Ley.

Las uniones temporales de empresarios (UTE), deberán atenerse a lo establecido en el Art. 69, de la LCSP, pudiendo estar formadas por empresarios dados de alta en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado (ROLECE), a tal fin.

El órgano de contratación tomará las medidas adecuadas para garantizar que la participación en la licitación de las empresas que hubieran participado previamente en la elaboración de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato o hubieran asesorado al órgano de contratación durante la preparación del procedimiento de contratación, no falsee la

competencia.

Los criterios de valoración para la adjudicación del contrato son lo que se especifican en la hoja resumen (HR), de este PCAP.

2.2.- Presentación de proposiciones.

El Órgano de Contratación fijará los plazos de presentación de las ofertas y solicitudes de participación teniendo en cuenta el tiempo que razonablemente pueda ser necesario para preparar aquellas, atendida la complejidad del contrato, y respetando, en todo caso, los plazos mínimos fijados en esta Ley conforme al Art. 136, de la LCSP.

En procedimientos abiertos de adjudicación de contratos sujetos a regulación armonizada, el plazo de presentación de proposiciones no será inferior a treinta y cinco días, para los contratos de servicios, contados desde la fecha de envío del anuncio de licitación a la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea. Se podrá reducir este plazo en los siguientes casos:

- a) Si el órgano de contratación hubiese enviado un anuncio de información previa, el plazo general de presentación de proposiciones podrá reducirse a quince días. Esta reducción del plazo solo será admisible cuando el anuncio voluntario de información previa se hubiese enviado para su publicación con una antelación máxima de doce meses y mínima de treinta y cinco días antes de la fecha de envío del anuncio de licitación, siempre que en él se hubiese incluido, de estar disponible, toda la información exigida para este.
- b) Cuando el plazo general de presentación de proposiciones sea impracticable por tratarse de una situación de urgencia, en los términos descritos en el Art. 119, el órgano de contratación podrá fijar otro plazo que no será inferior a quince días contados desde la fecha del envío del anuncio de licitación.
- c) Si el órgano de contratación aceptara la presentación de ofertas por medios electrónicos, podrá reducirse el plazo general de presentación de proposiciones en cinco días.

Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 3 del Art. 135, respecto de la obligación de publicar previamente en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE), en los procedimientos abiertos la publicación del anuncio de licitación en el perfil de contratante deberá hacerse, en todo caso, con una antelación mínima equivalente al plazo fijado para la presentación de las proposiciones en el apartado siguiente.

En los contratos de las Administraciones Públicas que no estén sujetos a regulación armonizada, el plazo de presentación de proposiciones no será inferior a quince días, contados desde el día siguiente al de la publicación del anuncio de licitación del contrato en el perfil de contratante.

Las ofertas o proposiciones de los licitadores se ajustarán a lo dispuesto en el Art. 139, de la Ley.

De acuerdo con lo previsto en el Art. 139.1, de la LCSP, la presentación de proposiciones por los interesados supone la aceptación incondicionada por parte del empresario de la totalidad de las cláusulas de este PCAP y su hoja resumen, sin salvedad o reserva alguna, así como la autorización a la mesa y al órgano de contratación para consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o en las listas oficiales de operadores económicos de un Estado miembro de la Unión Europea

Una vez entregada o remitida la proposición, la misma no puede ser retirada, salvo por causa debidamente justificada. Las proposiciones, que tendrán carácter secreto, se ajustarán en su forma y

contenido a lo dispuesto en este PCAP.

En caso de tramitación abierta simplificada, el plazo para la presentación de oferta no será inferior a quince días desde el día siguiente a la publicación del anuncio de licitación en el perfil del contratante. Si el contrato de servicios tiene un valor estimado inferior a 35.000,00.- €, (excepto los que tengan por objeto prestaciones de carácter intelectual), el plazo de presentación de proposiciones no podrá ser inferior a 10 días hábiles a contar desde el siguiente a la publicación del anuncio de licitación en el perfil de contratante.

En los casos de declaración de urgencia del expediente de contratación y el procedimiento de adjudicación sea el abierto simplificado, no se producirá la reducción de plazos, (Art. 119. 2.b, 6ª de la LCSP), salvo en el supuesto de contrato de servicios de regulación armonizada en el que se podrá establecer un plazo no inferior a quince días desde la fecha de envío del anuncio de licitación, (Art. 156.3 b de la LCSP).

Las proposiciones únicamente podrán ser presentadas en el registro que sea indicado en el anuncio de licitación.

2.3.- Garantía provisional.

En el procedimiento de contratación no procederá la exigencia de garantía provisional, salvo cuando de forma excepcional el órgano de contratación, por motivos de interés público, lo considere necesario y lo justifique motivadamente en el expediente.

En el anterior supuesto, se podrá exigir a los licitadores que constituyan una garantía provisional que responda del mantenimiento de sus ofertas hasta la perfección del contrato y por importe no superior al 3%, del presupuesto base del contrato, excluido el importe del IVA y se determinará el procedimiento para su devolución.

Esta garantía provisional podrá prestarse de cualquiera de las formas previstas en el apartado 1 del Art. 108, de la LCSP. Si se constituye en efectivo, deberá depositarse en la Caja General de Depósitos o en sus sucursales, encuadradas en las Delegaciones de Economía y Hacienda, a nombre de la Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales, F.S.P. En el resto de los supuestos se presentará el justificante correspondiente ante el Órgano de Contratación.

De conformidad con el Art. 159.4.b, de la LCSP, no procederá en ningún caso la constitución de garantía provisional si el procedimiento utilizado es el abierto simplificado.

2.4.- Forma y contenido de las proposiciones.

1. La presentación de ofertas se realizará como regla general utilizando medios electrónicos, salvo en los supuestos previstos en la Disposición Adicional decimoquinta de la LCSP, previo el oportuno informe razonado y específico para el uso de otros medios.

En relación con la presentación de la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos, se observarán las reglas establecidas a continuación:

- a) Las proposiciones en el procedimiento abierto deberán ir acompañadas de una declaración responsable que se ajustará al formulario de documento europeo único de contratación, (DEUC), que deberá estar firmada y con la correspondiente identificación, en la que el licitador ponga de manifiesto lo siguiente:

1. Que la sociedad está válidamente constituida y que conforme a su objeto social puede presentarse a la licitación, así como que el firmante de la declaración ostenta la debida representación para la presentación de la proposición y de aquella.
2. Que cuenta con la correspondiente clasificación, en su caso, o que cumple los requisitos de solvencia económica, financiera y técnica o profesional exigidos, en las condiciones que establezca el pliego de conformidad con el formulario normalizado del documento europeo único de contratación a que se refiere el artículo siguiente.
3. Que no está incurso en prohibición de contratar por sí misma ni por extensión como consecuencia de la aplicación del Art. 71.3, de esta Ley.
4. La designación de una dirección de correo electrónico en que efectuar las notificaciones, que deberá ser habilitada de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional decimoquinta, en los casos en que el órgano de contratación haya optado por realizar las notificaciones a través de la misma. Esta circunstancia deberá recogerse en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
- b) En los casos en que el empresario recurra a la solvencia y medios de otras empresas de conformidad con el Art. 75, de la presente Ley, cada una de ellas también deberá presentar una declaración responsable en la que figure la información pertinente para estos casos con arreglo al formulario normalizado del documento europeo único de contratación.
- c) La presentación del compromiso a que se refiere el apartado 2 del Art. 75, se realizará de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 3
- d) En todos los supuestos en que en el procedimiento se exija la constitución de garantía provisional, se aportará el documento acreditativo de haberla constituido.
- e) En todos los supuestos en que varios empresarios concurren agrupados en una unión temporal, se aportará una declaración responsable por cada empresa participante en la que figurará la información requerida en estos casos en el formulario del documento europeo único de contratación.
- f) Adicionalmente a la declaración o declaraciones a que se refiere el párrafo anterior se aportará el compromiso de constituir la unión temporal por parte de los empresarios que sean parte de la misma de conformidad con lo exigido en el apartado 3 del Art. 69, de esta Ley.
- g) Además de la declaración responsable a que se refiere la letra a) anterior, las empresas extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en España, deberán aportar una declaración de sometimiento a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.
- h) Cuando el pliego prevea la división en lotes del objeto del contrato, si los requisitos de solvencia económica y financiera o técnica y profesional exigidos variaran de un lote a otro, se aportará una declaración responsable por cada lote o grupo de lotes al que se apliquen los mismos requisitos de solvencia.
2. Cuando de conformidad con la LCSP, el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo exijan la acreditación de otras circunstancias distintas de las que comprende el formulario del documento europeo único de contratación a que se refiere el Art. 141, de la LCSP, los mismos deberán indicar la forma de su acreditación.

3. El órgano o la mesa de contratación podrán pedir a los candidatos o licitadores que presenten la totalidad o una parte de los documentos justificativos, cuando consideren que existen dudas razonables sobre la vigencia o fiabilidad de la declaración, cuando resulte necesario para el buen desarrollo del procedimiento y, en todo caso, antes de adjudicar el contrato.

No obstante lo anterior, cuando el empresario esté inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o figure en una base de datos nacional de un Estado miembro de la Unión Europea, como un expediente virtual de la empresa, un sistema de almacenamiento electrónico de documentos o un sistema de precalificación, y estos sean accesibles de modo gratuito para los citados órganos, no estará obligado a presentar los documentos justificativos u otra prueba documental de los datos inscritos en los referidos lugares.

4. Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar a las que se refieren los apartados anteriores, deberán concurrir en la fecha final de presentación de ofertas y subsistir en el momento de perfección del contrato.

Cuando de conformidad con lo establecido en el Art. 145, de la LCSP se utilice una pluralidad de criterios de adjudicación, los licitadores deberán presentar la proposición en dos sobres, (si la presentación se realiza en papel por concurrir alguno de los supuestos a que de forma tasada se refiere la Disposición Adicional 15, de la LCSP), o archivos electrónicos, el primero, cuyo contenido se refiera a la documentación que deba ser valorada conforme a los criterios cuya ponderación depende de un juicio de valor y el segundo con la documentación que va a ser valorada conforme criterios cuantificables mediante fórmulas.

Si el procedimiento de adjudicación es el abierto simplificado, se observarán las siguientes consideraciones:

- Todos los licitadores que se presenten deberán estar inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público.
- Cuando el contrato de servicios tenga un valor estimado inferior a 35.000€, (excepto en los casos en que se refiera a una prestación intelectual), la oferta se presentará en un único sobre o archivo electrónico y se evaluará con arreglo a los criterios de adjudicación cuantificables mediante las fórmulas establecidas en los pliegos. Se eximirá en este caso a los licitadores de la acreditación de la solvencia económica y financiera, así como de la Técnica o profesional.

2.5.- Acreditación, en su caso, de la representación.

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro, presentarán poder bastante al efecto y fotocopia legitimada notarialmente de su Documento Nacional de Identidad (DNI), o del documento que, en su caso, haga sus veces (Art. 5, de la Ley 39/2015).

Si la empresa fuera persona jurídica, el poder deberá figurar inscrito en el Registro Mercantil. Si se trata de un poder para acto concreto no es necesaria la inscripción en el Registro Mercantil, de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 94.5, del Reglamento del Registro Mercantil.

En el caso de que intervenga el representante legal de una entidad con personalidad jurídica, deberá aportarse copia compulsada, testimonio notarial o documento auténtico notarial de su nombramiento y facultades o de sus poderes, con las inscripciones necesarias en los registros públicos correspondientes, cuando ello fuere necesario.



2.6.- Acreditación de la solvencia económica, financiera y técnica o profesional de las empresas o, en su caso, de la clasificación.

Para celebrar contratos con el sector público los empresarios deberán acreditar estar en posesión de las condiciones mínimas de solvencia económica y financiera y profesional o técnica que se determinen por el órgano de contratación. Este requisito será sustituido por el de la clasificación, cuando esta sea exigible conforme a lo dispuesto en esta Ley. Los requisitos mínimos de solvencia que deba reunir el empresario y la documentación requerida para acreditar los mismos se indicarán en el anuncio de licitación y se especificarán en el pliego del contrato, debiendo estar vinculados a su objeto y ser proporcionales al mismo. (Art. 74 de la LCSP)

En los contratos de servicios, podrá exigirse a las personas jurídicas que especifiquen, en la oferta o en la solicitud de participación, los nombres y la cualificación profesional del personal responsable de ejecutar la prestación.

El órgano de contratación podrá exigir a los candidatos o licitadores, haciéndolo constar en los pliegos, que además de acreditar su solvencia o, en su caso, clasificación, se comprometan a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios personales o materiales suficientes para ello. Estos compromisos se integrarán en el contrato, debiendo los pliegos o el documento contractual, atribuirles el carácter de obligaciones esenciales a los efectos previstos en el Art. 211, o establecer penalidades, conforme a lo señalado en el Art. 192.2, para el caso de que se incumplan por el adjudicatario.

En el caso de contratos que atendida su complejidad técnica sea determinante la concreción de los medios personales o materiales necesarios para la ejecución del contrato, se exigirá el compromiso a que se refiere el párrafo anterior.

La adscripción de los medios personales o materiales como requisitos de solvencia adicionales a la clasificación del contratista deberá ser razonable, justificada y proporcional a la entidad y características del contrato, de forma que no limite la participación de las empresas en la licitación, (Art.76 LCSP).

Para los contratos de servicios no será exigible la clasificación del empresario. En el anuncio de licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y en los pliegos del contrato se establecerán los criterios y requisitos mínimos de solvencia económica y financiera y de solvencia técnica o profesional tanto en los términos establecidos en los Arts. 87 y 90 de la Ley como en términos de grupo o subgrupo de clasificación y de categoría mínima exigible, siempre que el objeto del contrato esté incluido en el ámbito de clasificación de alguno de los grupos o subgrupos de clasificación vigentes, atendiendo para ello al código CPV del contrato, según el Vocabulario común de contratos públicos aprobado por Reglamento (CE) 2195/2002, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de noviembre de 2002.

En tales casos, el empresario podrá acreditar su solvencia indistintamente mediante su clasificación en el grupo o subgrupo de clasificación y categoría de clasificación correspondientes al contrato o bien acreditando el cumplimiento de los requisitos específicos de solvencia exigidos en el anuncio de licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y detallados en los pliegos del contrato. Si los pliegos no concretaran los requisitos de solvencia económica y financiera o los requisitos de solvencia técnica o profesional, la acreditación de la solvencia se efectuará conforme a los criterios, requisitos y medios recogidos en el segundo inciso del apartado 3 del Art. 87, que tendrán carácter supletorio de lo que al respecto de los mismos haya sido omitido o no concretado en los pliegos. (Art.77, b LCSP)

La clasificación será exigible igualmente al cesionario del contrato en el supuesto en que hubiese sido

requerida al cedente

No será exigible la clasificación a los empresarios no españoles de Estados miembros de la Unión Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, ya concurran al contrato aisladamente o integrados en una unión, sin perjuicio de la obligación de acreditar su solvencia. Cuando no sea exigible la clasificación, se acreditará la solvencia económica, financiera y técnica o profesional de acuerdo con lo establecido en la hoja resumen (HR).

En los contratos no sometidos a regulación armonizada, cuando el contratista sea una empresa de nueva creación, es decir, que tenga una antigüedad inferior a cinco años, su solvencia técnica se acreditará mediante la indicación de su personal o unidades técnicas participantes en el contrato, especialmente, las de control de calidad y demás medios a que se refieren los apartados b) a i) del número 1 del Art. 90, de la LCSP, sin que le sea aplicable la exigencia contenida en su apartado a)

La **acreditación de la solvencia económica, financiera**, se hará por uno o varios de los medios siguientes (Art. 87, LCSP), según se establezca en la hoja resumen de este PCAP:

- Declaraciones apropiadas de entidades financieras o, en su caso, justificante de la existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales.
- Las cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil o en el Registro oficial que corresponda. Los empresarios no obligados a presentar las cuentas en Registros oficiales podrán aportar, como medio alternativo de acreditación, los libros de contabilidad debidamente legalizados.
- Declaración sobre el volumen global de negocios y, en su caso, sobre el volumen de negocios en el ámbito de actividades correspondiente al objeto del contrato, referido como máximo a los tres últimos ejercicios disponibles en función de la fecha de creación o de inicio de las actividades del empresario, en la medida en que se disponga de las referencias de dicho volumen de negocios.

La **acreditación de la solvencia técnica o profesional**, se hará por uno o varios de los medios siguientes (Art. 90 LCSP), según se establezca en la hoja resumen de este PCAP:

- Una relación de los principales servicios o trabajos realizados en los últimos tres años que incluya importe, fechas y el destinatario, público o privado, de los mismos. Los servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público o, cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario; en su caso, estos certificados serán comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad competente.

2.7.- Declaración responsable de no estar incurso el licitador en las prohibiciones para contratar recogidas en el Art.71, de la LCSP, firmada por el representante del mismo, según modelo del Anexo I, del PCAP

Todo ello se entiende sin perjuicio de que, cuando la persona física o los administradores de la persona o personas jurídicas que resulten adjudicatarias, estén incurso en alguno de los supuestos previstos en la Ley 3/2015, por la que se regula el Ejercicio del Alto Cargo de la Administración General del Estado; en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas o se tratara de cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en los términos establecidos en la misma, y disposiciones concordantes, se acredite, previamente a la adjudicación del contrato, la concesión de la correspondiente compatibilidad y su sometimiento a la normativa de



incompatibilidades vigente en el momento de la contratación.

La prohibición alcanzará a las personas jurídicas en cuyo capital participen, en los términos y cuantías establecidos en la legislación citada, el personal y los altos cargos de la Administración, así como los cargos electos al servicio de las mismas.

La prohibición alcanza, igualmente, a los cónyuges, personas vinculadas con análoga relación de convivencia afectiva y descendientes de las personas a que se refieren los párrafos anteriores, siempre que, respecto de los últimos, dichas personas ostenten su representación legal, de conformidad con lo establecido en el Art. 71,1,g de la LCSP.

2.8.- Las empresas extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en España, aportarán una declaración de someterse a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden para todas las incidencias que, de modo directo o indirecto, pudieran surgir del contrato con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.

2.9.- La documentación acreditativa de las circunstancias relativas a la personalidad jurídica.

Representación del empresario y, en su caso, la clasificación profesional o solvencia económica, financiera y técnica o profesional, podrá sustituirse por la respectiva certificación del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado.

Cuando la acreditación de dichas circunstancias, se realice mediante la certificación de un Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado prevista en el Art. 81, de la LCSP, o mediante un certificado comunitario de clasificación, deberá acompañarse a la misma una declaración responsable del licitador en la que manifieste que las circunstancias reflejadas en el correspondiente certificado no han experimentado variación. Esta manifestación deberá reiterarse, en caso de resultar adjudicatario, en el documento en que se formalice el contrato, sin perjuicio de que el Órgano de Contratación pueda, si lo estima conveniente, efectuar una consulta al Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas.

2.10.- Compromiso de constitución de Unión Temporal de Empresas (UTE).

Cuando dos o más empresas acudan a una licitación agrupadas en UTE, cada uno de los empresarios que la componen deberá acreditar su personalidad y capacidad, debiendo indicar en documento privado los nombres y circunstancias de los empresarios que la suscriban, la participación de cada uno de ellos, el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal (Art. 69, LCSP), caso de resultar adjudicatarios y la persona o entidad que, durante la vigencia del contrato, ha de ostentar la plena representación de todos ellos frente a la Administración.

El citado documento deberá estar firmado por los representantes de cada una de las empresas componentes de la UTE.

Los empresarios interesados en formar una UTE, podrán darse de alta en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado, que especificará esta circunstancia.

2.11.- Acreditación de hallarse al corriente en el pago del Impuesto de Actividades Económicas (IAE).

Para aquellos licitadores que no estén exentos conforme al Art. 82, del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se llevará a cabo mediante la presentación del alta o, en su caso, del último recibo del impuesto.

2.12.- Empresas vinculadas o pertenecientes a un mismo grupo de empresas.

A los efectos de lo previsto en el Art. 86, del RGLCAP, los licitadores presentarán una declaración en la

CORREO ELECTRÓNICO


fundacion@funprl.es

que relacionarán aquellas otras empresas del grupo, entendiendo por tales las que se encuentren en alguno de los supuestos del Art. 42, del Código de Comercio, que han presentado proposiciones a la licitación o, en su lugar, manifestarán expresamente que no se presentan proposiciones por otras empresas del grupo.

También podrán presentar documentación que acredite, en su caso, la implantación en su ámbito de medidas tendentes a promover la igualdad efectiva entre mujeres y hombres de acuerdo con lo establecido en el Art. 34, de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de hombres y mujeres. Esta documentación servirá para resolver el posible nuevo empate que pudiera producirse entre las ofertas tras la aplicación del criterio expresado en el párrafo anterior.

2.13.- Apertura y examen de las proposiciones.

2.13.1.- Documentación personal y documentación acreditativa de la clasificación o de la solvencia económica, financiera y técnica o profesional



Transcurrido el plazo de presentación de proposiciones, la Mesa de Contratación abrirá los archivos electrónicos (o en su caso los sobres) relativos a la documentación personal y documentación acreditativa de la clasificación o de la solvencia económica, financiera y técnica o profesional actuando en los términos indicados en los Art. 22, del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo. Si existieran defectos en la documentación presentada, se concederá un plazo de tres días hábiles para que el licitador los subsane, conforme al Art. 81, RGLCAP. Este archivo será distinto al que contenga la propuesta del licitador

A estos efectos, el Secretario de la Mesa de Contratación, comunicará a los interesados verbalmente, por correo electrónico, fax o telegrama la documentación que haya que subsanar, concediéndoles el plazo previsto en el párrafo anterior, con el apercibimiento de que, en caso de no subsanar se les excluirá de la licitación.

De todas las actuaciones realizadas, se dejará constancia en el acta que necesariamente deberá extenderse.

Una vez calificada la documentación general a que se refiere el Art. 140 de la LCSP, y subsanados, en su caso, los defectos u omisiones de la documentación presentada, la Mesa de Contratación procederá a determinar las empresas admitidas a licitación y las causas de rechazo de las no admitidas, con el fin de que este extremo pueda incluirse, en su caso, en la notificación de la adjudicación, de acuerdo con lo establecido en el Art. 155 de la LCSP

2.13.2.- Apertura de la documentación sobre la oferta:

1. La Mesa de Contratación calificará la documentación a que se refiere el Art. 140 de la LCSP, que deberá presentarse por los licitadores en sobre o archivo electrónico distinto al que contenga la proposición.

Posteriormente, el mismo órgano procederá a la apertura y examen de las proposiciones, formulando la correspondiente propuesta de adjudicación al órgano de contratación, una vez ponderados los criterios que deban aplicarse para efectuar la selección del adjudicatario.

2. Cuando, de conformidad con lo establecido en el Art. 145, de la LCSP se utilicen una pluralidad de criterios de adjudicación, los licitadores deberán presentar la proposición en dos sobres o archivos electrónicos: uno con la documentación que deba ser valorada conforme a los criterios cuya



ponderación depende de un juicio de valor, y el otro con la documentación que deba ser valorada conforme a criterios cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas.

3. En todo caso la apertura de las proposiciones deberá efectuarse en el plazo máximo de veinte días contado desde la fecha de finalización del plazo para presentar las mismas.

Si la proposición se contuviera en más de un sobre o archivo electrónico, de tal forma que estos deban abrirse en varios actos independientes, el plazo anterior se entenderá cumplido cuando se haya abierto, dentro del mismo, el primero de los sobres o archivos electrónicos que componen la proposición.

4. En todo caso, la apertura de la oferta económica se realizará en acto público, salvo cuando se prevea que en la licitación puedan emplearse medios electrónicos.

5. Cuando para la valoración de las proposiciones hayan de tenerse en cuenta criterios distintos al del precio, el órgano competente para ello podrá solicitar, antes de formular su propuesta, cuantos informes técnicos considere precisos. Igualmente, podrán solicitarse estos informes cuando sea necesario verificar que las ofertas cumplen con las especificaciones técnicas del pliego.

También se podrán requerir informes a las organizaciones sociales de usuarios destinatarios de la prestación, a las organizaciones representativas del ámbito de actividad al que corresponda el objeto del contrato, a las organizaciones sindicales, a las organizaciones que defiendan la igualdad de género y a otras organizaciones para la verificación de las consideraciones sociales y ambientales.

6. La propuesta de adjudicación no crea derecho alguno en favor del licitador propuesto frente a la Administración. No obstante, cuando el órgano de contratación no adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta formulada deberá motivar su decisión.

En la valoración de las ofertas técnicas y económicas de los licitadores se procederá, mediante resolución motivada, a la exclusión de aquellas proposiciones que incumplan de forma manifiesta las especificaciones del presente pliego o de las normas y demás disposiciones o instrucciones que resulten de aplicación al objeto de la licitación o a su realización o por cualquier otra circunstancia prevista en la LCSP o en el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo.

En caso de utilizarse el **procedimiento abierto simplificado**, se seguirán las siguientes especialidades:

1. La oferta se presentará en un único sobre en los supuestos en que en el procedimiento no se contemplen criterios de adjudicación cuya cuantificación dependa de un juicio de valor. En caso contrario, la oferta se presentará en dos sobres.

La apertura de los sobres conteniendo la proposición se hará por el orden que proceda de conformidad con lo establecido en el Art. 145, de la LCSP en función del método aplicable para valorar los criterios de adjudicación establecidos en los pliegos. La apertura se hará por la mesa de contratación a la que se refiere el apartado 6 del Art. 326, de la LCSP. En todo caso, será público el acto de apertura de los sobres que contengan la parte de la oferta evaluable a través de criterios cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas establecidas en los pliegos. A tal efecto, en el modelo de oferta que figure como anexo al pliego se contendrán estos extremos.

2. En los supuestos en que en el procedimiento se contemplen criterios de adjudicación cuya cuantificación dependa de un juicio de valor, la valoración de las proposiciones se hará por los servicios técnicos del órgano de contratación en un plazo no superior a siete días, debiendo ser

CORREO ELECTRÓNICO

fundacion@funprl.es



suscritas por el técnico o técnicos que realicen la valoración.

3. En todo caso, la valoración a la que se refiere el apartado anterior deberá estar efectuada con anterioridad al acto público de apertura del sobre que contenga la oferta evaluable a través de criterios cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas. En dicho acto público se procederá a la lectura del resultado de aquella.

Si la cuantía del contrato es, además inferior a 35.000,00.- €, la valoración de las ofertas se podrá efectuar automáticamente mediante dispositivos informáticos o con la unidad técnica que auxilie al órgano de contratación.

Se garantizará siempre mediante dispositivo electrónico, que la apertura de las proposiciones no se realizará hasta tanto haya finalizado el plazo para su presentación, por lo que no será precisa la celebración de acto público de apertura de las mismas.

3.- ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO (Arts. 150, 151 y 153 de la LCSP).

3.1.- Clasificación de las ofertas y propuesta de adjudicación:

La mesa de contratación o, en su defecto, el órgano de contratación clasificará, por orden decreciente, las proposiciones presentadas para posteriormente elevar la correspondiente propuesta al órgano de contratación, en el caso de que la clasificación se realice por la mesa de contratación. Para realizar la citada clasificación, se atenderá a los criterios de adjudicación señalados en el pliego, pudiéndose solicitar para ello cuantos informes técnicos se estime pertinentes. Cuando el único criterio a considerar sea el precio, se entenderá que la mejor oferta es la que incorpora el precio más bajo.

Cuando, se presente el caso de igualdad de las puntuaciones, serán de aplicación dentro de los criterios de desempate establecidos en el Art. 147 LCSP los siguientes:

Proposiciones presentadas por aquellas empresas que, al vencimiento del plazo de presentación de ofertas, tengan en su plantilla un porcentaje de trabajadores con discapacidad superior al que les imponga la normativa.

En este supuesto, si varias empresas licitadoras de las que hubieren empatado en cuanto a la proposición más ventajosa acreditan tener relación laboral con personas con discapacidad en un porcentaje superior al que les imponga la normativa, tendrá preferencia en la adjudicación del contrato el licitador que disponga del mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla.

Proposiciones de empresas de inserción reguladas en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulación del régimen de las empresas de inserción, que cumplan con los requisitos establecidos en dicha normativa para tener esta consideración.

Proposiciones presentadas por las empresas que, al vencimiento del plazo de presentación de ofertas, incluyan medidas de carácter social y laboral que favorezcan la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

En defecto de la previsión en los pliegos a la que se refiere el apartado anterior, el empate entre varias ofertas tras la aplicación de los criterios de adjudicación del contrato se resolverá mediante la aplicación por orden de los siguientes criterios sociales, referidos al momento de finalizar el plazo de presentación de ofertas:

- a) Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situación de exclusión social en la

plantilla de cada una de las empresas, primando en caso de igualdad, el mayor número de trabajadores fijos con discapacidad en plantilla, o el mayor número de personas trabajadoras en inclusión en la plantilla.

- b) Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las empresas.
- c) Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las empresas.
- d) El sorteo, en caso de que la aplicación de los anteriores criterios no hubiera dado lugar a desempate.

Una vez aceptada por el órgano de contratación la propuesta que realice la mesa de contratación, una vez ponderados los criterios que deban aplicarse para la selección del candidato, los servicios correspondientes requerirán al licitador que haya presentado la mejor oferta, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 145 para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, presente la documentación justificativa de las circunstancias a las que se refieren las letras a) a c) del apartado 1 del Art. 140, si no se hubiera aportado con anterioridad, tanto del licitador como de aquellas otras empresas a cuyas capacidades se recurra, sin perjuicio de lo establecido en el segundo párrafo del apartado 3 del citado artículo; de disponer efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al Art. 76.2; y de haber constituido la garantía definitiva que sea procedente. Los correspondientes certificados podrán ser expedidos por medios electrónicos, informáticos o telemáticos, salvo que se establezca otra cosa en los pliegos.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra la garantía provisional, si se hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido en la letra a) del apartado 2 del Art. 71.

En el supuesto señalado en el párrafo anterior, se procederá a recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

El órgano de contratación adjudicará el contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la documentación. En los procedimientos negociados, de diálogo competitivo y de asociación para la innovación, la adjudicación concretará y fijará los términos definitivos del contrato.

No podrá declararse desierta una licitación cuando exista alguna oferta o proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.

Si como consecuencia del contenido de la resolución de un recurso especial del Art. 44, fuera preciso que el órgano de contratación acordase la adjudicación del contrato a otro licitador, se concederá a este un plazo de diez días hábiles para que cumplimente los trámites que resulten oportunos.

El carácter desproporcionado o anormal de las ofertas se apreciará de acuerdo con los parámetros objetivos establecidos que sean contemplados en los pliegos a efectos de identificar los casos en que una oferta se considere anormal. En este caso, la Mesa de Contratación actuará tal y como se señala en el Art. 149.2, del LCSP y Art. 22.f, del RD 817/2009, de 8 de mayo.

La puntuación máxima que podrá obtenerse en la valoración es la fijada en la hoja resumen de este pliego de cláusulas administrativas particulares.

Si el procedimiento utilizado es el **abierto simplificado**, una vez celebrado el acto público de apertura del sobre que contenga la oferta evaluable a través de criterios cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas, la mesa procederá a:

CORREO ELECTRÓNICO

fundacion@funprr.es

23

CP001/2018 - CONTRATACIÓN DE APOYO AL DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA GESTOR DE ACCIONES Y EL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS DE LA FEPL

(De 15 de enero de 2019 a 15 de enero de 2020).

C/Príncipe de Vergara,
108, 2ª Planta
28002 MADRID
Teléf.: 91 535 89 15
Fax: 91 363 43 27.



1. Previa exclusión, en su caso, de las ofertas que no cumplan los requerimientos del pliego, evaluar y clasificar las ofertas.
2. Realizar la propuesta de adjudicación a favor del candidato con mejor puntuación.
3. Comprobar en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas que la empresa está debidamente constituida, el firmante de la proposición tiene poder bastante para formular la oferta, ostenta la solvencia económica, financiera y técnica o, en su caso la clasificación correspondiente y no está incurso en ninguna prohibición para contratar.
4. Requerir a la empresa que ha obtenido la mejor puntuación mediante comunicación electrónica para que constituya la garantía definitiva, así como para que aporte el compromiso al que se refiere el Art. 75.2, y la documentación justificativa de que dispone efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al Art. 76.2; y todo ello en el plazo de 7 días hábiles a contar desde el envío de la comunicación.

En el caso de que la oferta del licitador que haya obtenido la mejor puntuación se presuma que es anormalmente baja por darse los supuestos previstos en el Art. 149, de la LCSP, la mesa, realizadas las actuaciones recogidas en los puntos 1 y 2 anteriores, seguirá el procedimiento previsto en el citado artículo, si bien el plazo máximo para que justifique su oferta el licitador no podrá superar los 5 días hábiles desde el envío de la correspondiente comunicación

En caso de que en el plazo otorgado al efecto el candidato propuesto como adjudicatario no presente la garantía definitiva, se efectuará propuesta de adjudicación a favor del siguiente candidato en puntuación, otorgándole el correspondiente plazo para constituir la citada garantía definitiva.

En el supuesto de que el empresario tenga que presentar cualquier otra documentación que no esté inscrita en el Registro de Licitadores, la misma se tendrá que aportar en el plazo de 7 días hábiles establecido para presentar la garantía definitiva.

En los casos en que a la licitación se presenten empresarios extranjeros de un Estado miembro de la Unión Europea o signatario del Espacio Económico Europeo, la acreditación de su capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones se podrá realizar bien mediante consulta en la correspondiente lista oficial de operadores económicos autorizados de un Estado miembro, bien mediante la aportación de la documentación acreditativa de los citados extremos, que deberá presentar, en este último caso, en el plazo concedido para la presentación de la garantía definitiva.

En los casos de **declaración de urgencia** del expediente de contratación en el que el procedimiento de adjudicación utilizado sea el procedimiento abierto simplificado regulado en el presente Art., no se producirá la reducción de plazos a la que se refiere la letra b) del apartado 2 del Art. 119 de la LCSP.

En contratos de **servicios de valor estimado inferior a 35.000 euros**, excepto los que tengan por objeto prestaciones de carácter intelectual a los que no será de aplicación este apartado, el procedimiento abierto simplificado podrá seguir la siguiente tramitación:

- a) El plazo para la presentación de proposiciones no podrá ser inferior a diez días hábiles, a contar desde el siguiente a la publicación del anuncio de licitación en el perfil de contratante. No obstante lo anterior, cuando se trate de compras corrientes de bienes disponibles en el mercado el plazo será de 5 días hábiles.

CORREO ELECTRÓNICO

fundacion@funprl.es



- b) Se eximirá a los licitadores de la acreditación de la solvencia económica y financiera y técnica o profesional.
- c) La oferta se entregará en un único sobre o archivo electrónico y se evaluará, en todo caso, con arreglo a criterios de adjudicación cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas establecidas en los pliegos.
- d) La valoración de las ofertas se podrá efectuar automáticamente mediante dispositivos informáticos, o con la colaboración de una unidad técnica que auxilie al órgano de contratación.
- e) Se garantizará, mediante un dispositivo electrónico, que la apertura de las proposiciones no se realiza hasta que haya finalizado el plazo para su presentación, por lo que no se celebrará acto público de apertura de las mismas.
- f) Las ofertas presentadas y la documentación relativa a la valoración de las mismas serán accesibles de forma abierta por medios informáticos sin restricción alguna desde el momento en que se notifique la adjudicación del contrato.
- g) No se requerirá la constitución de garantía definitiva.
- h) La formalización del contrato podrá efectuarse mediante la firma de aceptación por el contratista de la resolución de adjudicación.

En todo lo no previsto en este apartado se aplicará la regulación general del procedimiento abierto simplificado prevista en este artículo.

3.2.- Efectos de la no presentación en plazo de la documentación justificativa del cumplimiento de los requisitos previos

El licitador que no cumplimente lo establecido en este apartado dentro del plazo señalado mediando dolo, culpa o negligencia podrá ser declarado en prohibición de contratar según lo previsto en el Art. 71.2.a, LCSP.

El licitador incurrirá en prohibición de contratar, de conformidad con lo previsto en el Art. 71.1.e, LCSP, si ha incurrido en falsedad al efectuar la declaración responsable a que se refiere el Art. 140, o al facilitar cualesquiera otros datos relativos a su capacidad y solvencia, o haber incumplido, por causa que le sea imputable, la obligación de comunicar la información prevista en el Art. 82.4, y en el Art. 343.1.

3.3.- Garantía definitiva.

Los licitadores que, en las licitaciones de los contratos que celebren las Administraciones Públicas, presenten las mejores ofertas de conformidad con lo dispuesto en el Art. 145, deberán constituir a disposición del órgano de contratación una garantía de un 5 por 100 del precio final ofertado por aquellos, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido. En el caso de los contratos con precios provisionales a que se refiere el apartado 7 del Art. 102, el porcentaje se calculará con referencia al precio máximo fijado, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.

La constitución de esta garantía deberá efectuarse por el licitador en el plazo de diez días hábiles,

CORREO ELECTRÓNICO

fundacion@funprl.es

contados desde el día siguiente a aquél en que se reciba el requerimiento de la Administración. En todo caso, la garantía definitiva responderá de los conceptos a que se refiere el Art. 110, del LCSP.

La garantía definitiva se constituirá de conformidad con lo preceptuado en el Art. 109 de la LCSP, del LCSP, y 55 a 57 del RGLCAP.

El justificante de constitución de la garantía definitiva en cualquiera de las formas definidas en el Art. 108 de la LCSP, deberá depositarse o entregarse en la Caja General de Depósitos o en sus sucursales encuadradas en la Delegaciones de Economía y Hacienda, a nombre la Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales, F.S.P, NIF: G-82354176.

No se exigirá la constitución de garantía definitiva en el procedimiento abierto simplificado.

3.4.- Renuncia a la celebración del contrato y desistimiento del procedimiento de adjudicación por la Administración (Art. 152. LCSP).

1. En el caso en que el órgano de contratación desista del procedimiento de adjudicación o decida no adjudicar o celebrar un contrato para el que se haya efectuado la correspondiente convocatoria, lo notificará a los candidatos o licitadores, informando también a la Comisión Europea de esta decisión cuando el contrato haya sido anunciado en el «Diario Oficial de la Unión Europea».

2. La decisión de no adjudicar o celebrar el contrato o el desistimiento del procedimiento podrán acordarse por el órgano de contratación antes de la formalización. En estos casos se compensará a los candidatos aptos para participar en la licitación o licitadores por los gastos en que hubiesen incurrido en la forma prevista en el anuncio o en el pliego o, en su defecto, de acuerdo con los criterios de valoración empleados para el cálculo de la responsabilidad patrimonial de la Administración, a través de los trámites del procedimiento administrativo común.

3. Solo podrá adoptarse la decisión de no adjudicar o celebrar el contrato por razones de interés público debidamente justificadas en el expediente. En este caso, no podrá promoverse una nueva licitación de su objeto en tanto subsistan las razones alegadas para fundamentar la decisión.

4. El desistimiento del procedimiento deberá estar fundado en una infracción no subsanable de las normas de preparación del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicación, debiendo justificarse en el expediente la concurrencia de la causa. El desistimiento no impedirá la iniciación inmediata de un procedimiento de licitación.

5. En el supuesto de acuerdos marco, el desistimiento y la decisión de no adjudicarlos o celebrarlos corresponde al órgano de contratación que inició el procedimiento para su celebración. En el caso de contratos basados en un acuerdo marco y en el de contratos específicos en el marco de un sistema dinámico de adquisición, el desistimiento y la decisión de no adjudicarlos o celebrarlo se realizará por el órgano de contratación de oficio, o a propuesta del organismo destinatario de la prestación.



3.5.- Adjudicación del contrato y notificación de la adjudicación. (Art. 151, LCSP)

Cuando el único criterio para seleccionar al adjudicatario del contrato sea el del precio, la adjudicación deberá recaer en el plazo máximo de quince días a contar desde el siguiente al de apertura de las proposiciones.

Cuando para la adjudicación del contrato deban tenerse en cuenta una pluralidad de criterios, o utilizándose un único criterio sea este el del menor coste del ciclo de vida, el plazo máximo para efectuar la adjudicación será de dos meses a contar desde la apertura de las proposiciones, salvo que se hubiese establecido otro en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

Si la proposición se contuviera en más de un sobre o archivo electrónico, de tal forma que estos deban abrirse en varios actos independientes, el plazo anterior se computará desde el primer acto de apertura del sobre o archivo electrónico que contenga una parte de la proposición.

Los plazos indicados en los apartados anteriores se ampliarán en quince días hábiles cuando sea necesario seguir los trámites a que se refiere el apartado 4 del Art. 149, de la presente Ley.

De no producirse la adjudicación dentro de los plazos señalados, los licitadores tendrán derecho a retirar su proposición, y a la devolución de la garantía provisional, de existir esta.

La resolución de adjudicación será motivada y se notificará a los candidatos y licitadores, debiendo ser publicada en el perfil de contratante en el plazo de 15 días.

Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 1 del Art. 155, la notificación y la publicidad a que se refiere el apartado anterior deberán contener la información necesaria que permita a los interesados en el procedimiento de adjudicación interponer recurso suficientemente fundado contra la decisión de adjudicación, y entre ella en todo caso deberá figurar la siguiente:

- a) En relación con los candidatos descartados, la exposición resumida de las razones por las que se haya desestimado su candidatura.
- b) Con respecto a los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicación, los motivos por los que no se haya admitido su oferta, incluidos, en los casos contemplados en el Art. 126, apartados 7 y 8, los motivos de la decisión de no equivalencia o de la decisión de que las obras, los suministros o los servicios no se ajustan a los requisitos de rendimiento o a las exigencias funcionales; y un desglose de las valoraciones asignadas a los distintos licitadores, incluyendo al adjudicatario.
- c) En todo caso, el nombre del adjudicatario, las características y ventajas de la proposición del adjudicatario determinantes de que haya sido seleccionada la oferta de este con preferencia respecto de las que hayan presentado los restantes licitadores cuyas ofertas hayan sido admitidas; y, en su caso, el desarrollo de las negociaciones o el diálogo con los licitadores.

En la notificación se indicará el plazo en que debe procederse a la formalización del contrato conforme al apartado 3 del Art. 153, de la presente Ley.

La notificación se realizará por medios electrónicos de conformidad con lo establecido en la disposición adicional decimoquinta de la LCSP

Será de aplicación a la motivación de la adjudicación la excepción de confidencialidad igualmente, el Órgano de Contratación podrá no comunicar determinados datos relativos a la adjudicación cuando considere que concurre alguno de los supuestos mencionados en el Art. 133, de la LCSP.

CORREO ELECTRÓNICO

fundacion@funpr.es

3.6.- Formalización del contrato y publicidad (ART. 153, LCSP).

El contrato se formalizará ante el Órgano de Contratación, en documento administrativo que se ajuste con exactitud a las condiciones de la licitación, constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a cualquier registro público. No obstante, el contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de su cargo los correspondientes gastos. En ningún caso, se podrán incluir en el documento en que se formalice el contrato cláusulas que impliquen alteración de los términos de la adjudicación.

Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratación conforme al Art. 44 de la LCSP, la formalización no podrá efectuarse antes de que transcurran quince días hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos. Las Comunidades Autónomas podrán incrementar este plazo, sin que exceda de un mes

El Órgano de Contratación requerirá al adjudicatario para que formalice el contrato en plazo no superior a cinco días a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, una vez transcurrido el plazo previsto en el párrafo anterior, sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la suspensión de la formalización del contrato. De igual forma procederá cuando el órgano competente para la resolución del recurso hubiera levantado la suspensión.

En los restantes casos, la formalización del contrato deberá efectuarse no más tarde de los quince días hábiles siguientes a aquél en que se reciba la notificación de la adjudicación a los licitadores y en la forma prevista en el Art. 151 LCSP.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo indicado se le exigirá el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra la garantía definitiva, si se hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido en la letra b) del apartado 2 del Art. 71.

En este caso, el contrato se adjudicará al siguiente licitador por el orden en que hubieran quedado clasificadas las ofertas, previa presentación de la documentación establecida en el apartado 2 del Art. 150 de la presente Ley, resultando de aplicación los plazos establecidos en el apartado anterior.

Si el procedimiento seguido es abierto simplificado, y siempre que se trate de contratos de servicios con un valor estimado inferior a 35.000 €, la formalización del contrato podrá efectuarse mediante la firma de aceptación por el contratista de la resolución de adjudicación

En caso de tramitación urgente del expediente, los plazos para la formalización del contrato se reducen a la mitad

Si las causas de la no formalización fueren imputables a la Administración, se indemnizará al contratista de los daños y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.

El contrato se perfecciona con su formalización y en ningún caso podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización, excepto en los casos previstos en el Art. 153.6 de la LCSP.

Serán de cuenta del adjudicatario o adjudicatarios, en su caso, los gastos derivados de la formalización del contrato, incluidos los tributos y todos los demás gastos exigibles por las disposiciones vigentes.

En el supuesto de que el contratista opte por formalizar el contrato en documento público notarial, realizará las actividades precisas para el otorgamiento de la escritura pública ante el notario que designe el Colegio Notarial de la provincia en que se formalice el contrato, corriendo, en este caso, de su cuenta todos los gastos que suponga el otorgamiento de la escritura notarial.

El adjudicatario entregará una copia autorizada y tres simples en el Órgano de Contratación que figura en la hoja resumen (HR).

El Órgano de Contratación, podrá no comunicar determinados datos relativos a la adjudicación cuando considere, justificándolo debidamente en el expediente, que la divulgación de esa información puede obstaculizar la aplicación de una norma, resultar contraria al interés público o perjudicar intereses comerciales legítimos de empresas públicas o privadas o la competencia leal entre ellas, o cuando se trate de contratos declarados secretos o reservados o cuya ejecución deba ir acompañada de medidas de seguridad especiales conforme a la legislación vigente, o cuando lo exija la protección de los intereses esenciales de la seguridad del Estado y así se haya declarado de conformidad con lo previsto en el Art.154.7, de la LCSP.

3.7.- Anuncio de formalización de los contratos.

1. La formalización de los contratos deberá publicarse, junto con el correspondiente contrato, en un plazo no superior a quince días tras el perfeccionamiento del contrato en el perfil de contratante del órgano de contratación. Cuando el contrato esté sujeto a regulación armonizada, el anuncio de formalización deberá publicarse, además, en el Diario Oficial de la Unión Europea.
2. En los contratos celebrados por la Administración General del Estado, o por las entidades vinculadas a la misma que gocen de la naturaleza de Administraciones Públicas el anuncio de formalización se publicará además, en el plazo señalado en el apartado anterior, en el Boletín Oficial del Estado.
3. El órgano de contratación, cuando proceda, enviará el anuncio de formalización al «Diario Oficial de la Unión Europea» a más tardar 10 días después de la formalización del contrato.

Los anuncios de formalización no se publicarán en los lugares indicados en los apartados primero y segundo del presente Art. antes de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea, en el caso en que deban ser publicados en dicho Diario Oficial, debiendo indicar la fecha de aquel envío, de la que los servicios dependientes del órgano de contratación dejarán prueba suficiente en el expediente, y no podrán contener indicaciones distintas a las incluidas en dicho anuncio. No obstante, en todo caso podrán publicarse si el órgano de contratación no ha recibido notificación de su publicación a las 48 horas de la confirmación de la recepción del anuncio enviado.

4. La adjudicación de los contratos basados en un acuerdo marco o de los contratos específicos en el marco de un sistema dinámico de adquisición, ya perfeccionados en virtud de lo establecido en el Art. 36.3, de la LCSP, se publicará trimestralmente por el órgano de contratación dentro de los 30 días siguientes al fin de cada trimestre, en la forma prevista en el presente artículo.
5. Los contratos menores serán objeto de publicación en las condiciones establecidas en el apartado 4 del Art. 63, de la LCSP.
6. Los anuncios de formalización de contratos contendrán la información recogida en el Anexo III a la LCSP
7. Podrán no publicarse determinados datos relativos a la celebración del contrato cuando se considere, justificándose debidamente en el expediente, que la divulgación de esa información puede obstaculizar la aplicación de una norma, resultar contraria al interés público o perjudicar intereses comerciales legítimos de empresas públicas o privadas o la competencia leal entre

ellas, o cuando se trate de contratos declarados secretos o reservados o cuya ejecución deba ir acompañada de medidas de seguridad especiales conforme a la legislación vigente, o cuando lo exija la protección de los intereses esenciales de la seguridad del Estado y así se haya declarado de conformidad con lo previsto en la letra c) del apartado 2 del Art. 19, de la LCSP

En todo caso, previa la decisión de no publicar unos determinados datos relativos a la celebración del contrato, los órganos de contratación deberán solicitar la emisión de informe por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno a que se refiere la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, en el que se aprecie si el derecho de acceso a la información pública prevalece o no frente a los bienes que se pretenden salvaguardar con su no publicación, que será evacuado en un plazo máximo de diez días.

No obstante lo anterior, no se requerirá dicho informe por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en caso de que con anterioridad se hubiese efectuado por el órgano de contratación consulta sobre una materia idéntica o análoga, sin perjuicio de la justificación debida de su exclusión en el expediente en los términos establecidos en este apartado.

3.8.- Comunicación a los candidatos y a los licitadores.

1. Los órganos de contratación informarán a cada candidato y licitador en el plazo más breve posible de las decisiones tomadas en relación con la celebración de un acuerdo marco, con la adjudicación del contrato o con la admisión a un sistema dinámico de adquisición, incluidos los motivos por los que hayan decidido no celebrar un acuerdo marco, no adjudicar un contrato para el que se haya efectuado una convocatoria de licitación o volver a iniciar el procedimiento, o no aplicar un sistema dinámico de adquisición.
2. A petición del candidato o licitador de que se trate, los órganos de contratación comunicarán, lo antes posible, y, en cualquier caso, en un plazo de quince días a partir de la recepción de una solicitud por escrito:
 - a) A todos los candidatos descartados, los motivos por los que se haya desestimado su candidatura.
 - b) A todos los licitadores descartados, los motivos por los que se haya desestimado su oferta, incluidos, en los casos contemplados en el Art. 126, apartados 7 y 8, los motivos de su decisión de no equivalencia o de su decisión de que las obras, los suministros o los servicios no se ajustan a los requisitos de rendimiento o a las exigencias funcionales.
 - c) A todo licitador que haya presentado una oferta admisible, las características y ventajas relativas de la oferta seleccionada, así como el nombre del adjudicatario o las partes en el acuerdo marco.
 - d) A todo licitador que haya presentado una oferta admisible, el desarrollo de las negociaciones y el diálogo con los licitadores.
3. Los poderes adjudicadores podrán decidir no comunicar determinados datos, mencionados en los apartados 1 y 2, relativos a la adjudicación del contrato, la celebración de acuerdos marco o la admisión a un sistema dinámico de adquisición, cuando su divulgación pudiera obstaculizar la aplicación de la ley, ser contraria al interés público, perjudicar los intereses comerciales legítimos de una determinada empresa, pública o privada, o perjudicar la competencia leal



entre empresarios.

4.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Art. 192 a 201 LCSP).

El contrato se ejecutará con sujeción a lo previsto en su clausulado, en este pliego (PCAP), en la hoja resumen (HR), del citado pliego y en el pliego de prescripciones técnicas (PPT) y de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diere al contratista el Órgano de Contratación.

4.1.- Principio de riesgo y ventura (Art. 197, LCSP).

La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista, de acuerdo con los límites y responsabilidades establecidos en el Art. 197 LCSP. El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan para la Administración o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato.

4.2.- Facultades de dirección e inspección de la FEPR.

La ejecución del contrato se desarrollará bajo la dirección, inspección y control del Órgano de Contratación, el cual podrá dictar las instrucciones oportunas para el fiel cumplimiento de lo convenido.

La dirección e inspección de la ejecución de los servicios que se contratan, así como la comprobación de las características y calidades de los mismos se realizarán, sin perjuicio de las recepciones oficiales que procedan, por las Unidades competentes de la FEPR, o en caso de haber sido designado, por el responsable del contrato quien podrá dirigir instrucciones al contratista, inspeccionar y ser informado, cuando lo solicite, acerca de los materiales empleados o del proceso de ejecución de los servicios, pudiendo, en los casos que estime pertinente, solicitar los asesoramientos técnicos de las personas o entidades más idóneas por su especialización.

4.3.- Plazo de ejecución.

El plazo para la ejecución del contrato, los plazos parciales que, en su caso, pudieran establecerse, así como las prórrogas, serán los consignados en la hoja resumen (HR) del PCAP, o desde la formalización del contrato si ésta fuese posterior, salvo que se declare con anterioridad a su duración inicial la centralización del servicio, declarada por la autoridad competente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

El plazo de vigencia del contrato no podrá ser superior a cinco años (Art. 29,4 LCSP), incluyendo las posibles prórrogas que de conformidad con el apartado 2 de este mismo Art. pudieran ser acordadas con las condiciones y límites establecidos en la Ley General Presupuestaria.

Excepcionalmente, en los contratos de servicios se podrá establecer un plazo de duración superior al establecido en el párrafo anterior, cuando lo exija el período de recuperación de las inversiones directamente relacionadas con el contrato y estas no sean susceptibles de utilizarse en el resto de la actividad productiva del contratista o su utilización fuera antieconómica, siempre que la amortización de dichas inversiones sea un coste relevante en la prestación del servicio, circunstancias que deberán ser justificadas en el expediente de contratación con indicación de las inversiones a las que se refiera y de su período de recuperación. El concepto de coste relevante en la prestación del servicio será objeto

CORREO ELECTRÓNICO

fundacion@funprl.es

de desarrollo reglamentario.

El contrato de servicios de mantenimiento que se concierte conjuntamente con el de la compra del bien a mantener, cuando dicho mantenimiento solo pueda ser prestado por razones de exclusividad por la empresa que suministró dicho bien, podrá tener como plazo de duración el de la vida útil del producto adquirido.

Asimismo, podrá establecerse en los contratos de servicios relativos a los servicios a las personas un plazo de duración mayor cuando ello fuera necesario para la continuidad de aquellos tratamientos a los usuarios en los que el cambio del prestador pudiera repercutir negativamente.

No obstante lo establecido en los apartados anteriores, cuando al vencimiento de un contrato no se hubiera formalizado el nuevo contrato que garantice la continuidad de la prestación a realizar por el contratista como consecuencia de incidencias resultantes de acontecimientos imprevisibles para el órgano de contratación producidas en el procedimiento de adjudicación y existan razones de interés público para no interrumpir la prestación, se podrá prorrogar el contrato originario hasta que comience la ejecución del nuevo contrato y en todo caso por un periodo máximo de nueve meses, sin modificar las restantes condiciones del contrato, siempre que el anuncio de licitación del nuevo contrato se haya publicado con una antelación mínima de tres meses respecto de la fecha de finalización del contrato originario

En cualquier caso, la Administración se reserva el derecho de ordenar al contratista el escalonamiento en la realización de los servicios o de modificar el calendario de plazos, siempre que éstos se verifiquen con arreglo a la distribución de anualidades previstas en el presente pliego y sin que el contratista adquiera, por ello, ningún derecho a indemnización frente a la Administración.

4.4.- Cumplimiento del plazo y penalidades por demora.

El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realización del mismo, así como de los plazos parciales que, en su caso, se hubiesen señalado para su ejecución sucesiva.

El contratista incurrirá en mora en el caso de incumplimiento de los plazos previstos, sin que la constitución en mora del contratista requiera la interpelación o la intimación previa, por parte de la Administración.

Si llegado el término de cualquiera de los plazos citados el contratista hubiera incurrido en mora por causas imputables al mismo, la Administración podrá optar por la resolución del contrato o por la imposición de penalidades económicas, conforme a lo previsto en el Art. 193 y 194 de la LCSP, debiendo conceder, caso de optar por la imposición de penalidades, la ampliación del plazo del contrato que estime resulte necesaria para la terminación del mismo.

Las penalidades previstas en los dos artículos anteriores se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, adoptado a propuesta del responsable del contrato si se hubiese designado, que será inmediatamente ejecutivo, y se harán efectivas mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban abonarse al contratista o sobre la garantía que, en su caso, se hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de los mencionados pagos. En todo caso, la garantía definitiva responderá de la efectividad de aquéllas, de acuerdo con lo establecido en el Art. 11 de la LCSP.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del cinco por ciento (5%), del precio del contrato, el Órgano de Contratación estará facultado para proceder a la resolución del contrato o para acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades.

CORREO ELECTRÓNICO

fundacion@funprr.es



Las reducciones y penalidades a las que se ha hecho referencia en los apartados anteriores, no excluyen la indemnización a que la Administración pudiera tener derecho por los daños y perjuicios ocasionados por el retraso imputable al contratista.

4.5.- Ejecución defectuosa y penalidades administrativas.

En el caso de cumplimiento defectuoso de las prestaciones objeto del contrato se aplicarán, con independencia de la obligación que legalmente incumbe al contratista en cuanto a la reparación o subsanación de tales defectos, las penalidades previstas en la HR del PCAP, que deberán ser proporcionales a la gravedad del incumplimiento y su cuantía no podrá ser superior al diez por ciento (10%), del precio del contrato. El total de las penalizaciones impuestas no puede ser superior al 50% del precio del contrato.

En el caso de cumplimiento defectuoso de la prestación objeto del contrato a consecuencia de la disminución de prestaciones no recuperables o por la baja en el rendimiento convenido, procederá la reducción correspondiente en el abono del precio del contrato con independencia de los efectos de la indemnización, resolución, con o sin pérdida de la garantía, o penalidad a que pudiera dar lugar la causa que lo originase, de conformidad con lo dispuesto en esta cláusula.

En caso de incumplimiento, por causa imputable al contratista, de la ejecución parcial de las prestaciones definidas en el contrato, la Administración podrá optar, indistintamente, por la resolución del contrato o por la imposición de las penalidades que, para tal supuesto, se fijan en la HR.

El importe de las penalidades se hará efectivo mediante la deducción de las mismas de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban abonarse al contratista. En todo caso, la garantía definitiva responderá de la efectividad de aquéllas.

4.6.- Responsabilidad del contratista por daños y perjuicios.

El contratista será responsable de todos los daños y perjuicios directos e indirectos que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato. Si los daños y perjuicios ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa de una orden dada por la Administración, ésta será responsable dentro de los límites señalados en las leyes. En todo caso, será de aplicación lo preceptuado en el Art. 196 de la LCSP.

Igualmente, el contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos y de las prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan para la Administración o para terceros por errores u omisiones o métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato.

4.7.- Modificación del contrato.

Sin perjuicio de los supuestos previstos en la LCSP respecto a la sucesión en la persona del contratista, cesión del contrato, revisión de precios y ampliación del plazo de ejecución, los contratos administrativos solo podrán ser modificados por razones de interés público en los casos y en la forma previstos, y de acuerdo con el procedimiento regulado en el Art. 191, con las particularidades previstas en el Art. 207, ambos de la LCSP.

Los contratos administrativos celebrados por los órganos de contratación sólo podrán modificarse



durante su vigencia cuando se dé alguno de los siguientes supuestos:

- a) Cuando así se haya previsto en el pliego de cláusulas administrativas particulares, en los términos y condiciones establecidos en el Art. 204;
- b) Excepcionalmente, cuando sea necesario realizar una modificación que no esté prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares, siempre y cuando se cumplan las condiciones que establece el Art. 205.

En cualesquiera otros supuestos, si fuese necesario que un contrato en vigor se ejecutase en forma distinta a la pactada, deberá procederse a su resolución y a la celebración de otro bajo las condiciones pertinentes, en su caso previa convocatoria y sustanciación de una nueva licitación pública de conformidad con lo establecido en esta Ley, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 6 del Art. 213 respecto de la obligación del contratista de adoptar medidas que resulten necesarias por razones de seguridad, servicio público o posible ruina.

Las modificaciones del contrato deberán formalizarse conforme a lo dispuesto en el Art. 153, y deberán publicarse de acuerdo con lo establecido en los Arts. 207 y 63.

4.8.- Suspensión del contrato.

Si se acordase la suspensión del contrato o aquella tuviere lugar por la aplicación de lo dispuesto en el Art. 198.5, de la LCSP, se extenderá un acta, de oficio o a solicitud del contratista, en la que se consignarán las circunstancias que la han motivado y la situación de hecho en la ejecución de aquel.

Acordada la suspensión, la Administración abonará al contratista los daños y perjuicios efectivamente sufridos por este con sujeción a las siguientes reglas:

a) Salvo que el pliego que rija el contrato establezca otra cosa, dicho abono solo comprenderá, siempre que en los puntos 1.º a 4.º se acredite fehacientemente su realidad, efectividad e importe, los siguientes conceptos:

1. Gastos por mantenimiento de la garantía definitiva.
2. Indemnizaciones por extinción o suspensión de los contratos de trabajo que el contratista tuviera concertados para la ejecución del contrato al tiempo de iniciarse la suspensión.
3. Gastos salariales del personal que necesariamente deba quedar adscrito al contrato durante el período de suspensión.
4. Alquileres o costes de mantenimiento de maquinaria, instalaciones y equipos siempre que el contratista acredite que estos medios no pudieron ser empleados para otros fines distintos de la ejecución del contrato suspendido.
5. Un 3 por 100 del precio de las prestaciones que debiera haber ejecutado el contratista durante el período de suspensión, conforme a lo previsto en el programa de trabajo o en el propio contrato.
6. Los gastos correspondientes a las pólizas de seguro suscritas por el contratista y previstos en el pliego de cláusulas administrativas vinculados al objeto del contrato.
7. Solo se indemnizarán los períodos de suspensión que estuvieran documentados en la correspondiente acta. El contratista podrá pedir que se extienda dicha acta. Si la Administración no responde a esta solicitud se entenderá, salvo prueba en contrario, que se ha iniciado la suspensión en la fecha señalada por el contratista en su solicitud.

8. El derecho a reclamar prescribe en un año contado desde que el contratista reciba la orden de reanudar la ejecución del contrato

4.9.- Cesión del contrato.

Al margen de los supuestos de sucesión del contratista del Art. 98 y sin perjuicio de la subrogación que pudiera producirse a favor del acreedor hipotecario conforme al Art. 274.2 de la LCSP o del adjudicatario en el procedimiento de ejecución hipotecaria en virtud del Art. 275 de la LCSP, la modificación subjetiva de los contratos solamente será posible por cesión contractual, cuando obedezca a una opción inequívoca de los pliegos, dentro de los límites establecidos en el párrafo siguiente.

A tales efectos, los pliegos establecerán necesariamente que los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos por el contratista a un tercero siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido razón determinante de la adjudicación del contrato, y de la cesión no resulte una restricción efectiva de la competencia en el mercado. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 2, letra b), no podrá autorizarse la cesión a un tercero cuando esta suponga una alteración sustancial de las características del contratista si estas constituyen un elemento esencial del contrato.

Cuando los pliegos prevean que los licitadores que resulten adjudicatarios constituyan una sociedad específicamente para la ejecución del contrato, establecerán la posibilidad de cesión de las participaciones de esa sociedad; así como el supuesto en que, por implicar un cambio de control sobre el contratista, esa cesión de participaciones deba ser equiparada a una cesión contractual a los efectos de su autorización de acuerdo con lo previsto en el presente artículo. Los pliegos podrán prever mecanismos de control de la cesión de participaciones que no impliquen un cambio de control en supuestos que estén suficientemente justificados.

Para que los contratistas puedan ceder sus derechos y obligaciones a terceros, los pliegos deberán contemplar, como mínimo, la exigencia de los siguientes requisitos:

- a) Que el órgano de contratación autorice, de forma previa y expresa, la cesión. Dicha autorización se otorgará siempre que se den los requisitos previstos en las letras siguientes. El plazo para la notificación de la resolución sobre la solicitud de autorización será de dos meses, transcurrido el cual deberá entenderse otorgada por silencio administrativo.
- b) Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del contrato o cuando se trate de un contrato de concesión de obras o concesión de servicios, que haya efectuado su explotación durante al menos una quinta parte del plazo de duración del contrato. No será de aplicación este requisito si la cesión se produce encontrándose el contratista en concurso, aunque se haya abierto la fase de liquidación, o ha puesto en conocimiento del juzgado competente para la declaración del concurso que ha iniciado negociaciones para alcanzar un acuerdo de refinanciación, o para obtener adhesiones a una propuesta anticipada de convenio, en los términos previstos en la legislación concursal.

No obstante lo anterior, el acreedor pignoraticio o el acreedor hipotecario podrá solicitar la cesión en aquellos supuestos en que los contratos de concesión de obras y de concesión de servicios los pliegos prevean, mediante cláusulas claras e inequívocas, la posibilidad de subrogación de un tercero en todos los derechos y obligaciones del concesionario en caso de concurrencia de algún indicio claro y predeterminado de la inviabilidad, presente o futura, de la concesión, con la finalidad de evitar su resolución anticipada.

- c) Que el cesionario tenga capacidad para contratar con la Administración y la solvencia que resulte exigible en función de la fase de ejecución del contrato, debiendo estar debidamente clasificado si tal requisito ha sido exigido al cedente, y no estar incurso en una causa de prohibición de contratar.
- d) Que la cesión se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura pública.
- e) El cesionario quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones que corresponderían al cedente.

4.10.- Subcontratación.

El contratista podrá concertar con terceros la realización parcial de la prestación con sujeción a lo que dispongan los pliegos, salvo que conforme a lo establecido en las letras d) y e) del apartado 2.º del Art. 215 de la LCSP, la prestación o parte de la misma haya de ser ejecutada directamente por el primero.

En ningún caso la limitación de la subcontratación podrá suponer que se produzca una restricción efectiva de la competencia, sin perjuicio de lo establecido en la presente Ley respecto a los contratos de carácter secreto o reservado, o aquellos cuya ejecución deba ir acompañada de medidas de seguridad especiales de acuerdo con disposiciones legales o reglamentarias o cuando lo exija la protección de los intereses esenciales de la seguridad del Estado.

1.- La celebración de los subcontratos estará sometida al cumplimiento de los siguientes requisitos:

- a) Si así se prevé en los pliegos, los licitadores deberán indicar en la oferta la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, señalando su importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realización.
- b) En todo caso, el contratista deberá comunicar por escrito, tras la adjudicación del contrato y, a más tardar, cuando inicie la ejecución de este, al órgano de contratación la intención de celebrar los subcontratos, señalando la parte de la prestación que se pretende subcontratar y la identidad, datos de contacto y representante o representantes legales del subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de este para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, y acreditando que el mismo no se encuentra incurso en prohibición de contratar de acuerdo con el Art. 71.

El contratista principal deberá notificar por escrito al órgano de contratación cualquier modificación que sufra esta información durante la ejecución del contrato principal, y toda la información necesaria sobre los nuevos subcontratistas.

En el caso que el subcontratista tuviera la clasificación adecuada para realizar la parte del contrato objeto de la subcontratación, la comunicación de esta circunstancia será suficiente para acreditar la aptitud del mismo.

La acreditación de la aptitud del subcontratista podrá realizarse inmediatamente después de la celebración del subcontrato si esta es necesaria para atender a una situación de emergencia o que exija la adopción de medidas urgentes y así se justifica suficientemente.

- c) Si los pliegos hubiesen impuesto a los licitadores la obligación de comunicar las circunstancias señaladas en la letra a) del presente apartado, los subcontratos que no se ajusten a lo indicado en la oferta, por celebrarse con empresarios distintos de los indicados nominativamente en la misma o por referirse a partes de la prestación diferentes a las señaladas en ella, no podrán celebrarse hasta que transcurran veinte días desde que se hubiese cursado la notificación y aportado las



justificaciones a que se refiere la letra b) de este apartado, salvo que con anterioridad hubiesen sido autorizados expresamente, siempre que la Administración no hubiese notificado dentro de este plazo su oposición a los mismos. Este régimen será igualmente aplicable si los subcontratistas hubiesen sido identificados en la oferta mediante la descripción de su perfil profesional.

Bajo la responsabilidad del contratista, los subcontratos podrán concluirse sin necesidad de dejar transcurrir el plazo de veinte días si su celebración es necesaria para atender a una situación de emergencia o que exija la adopción de medidas urgentes y así se justifica suficientemente.

d) En los contratos de carácter secreto o reservado, o en aquellos cuya ejecución deba ir acompañada de medidas de seguridad especiales de acuerdo con disposiciones legales o reglamentarias o cuando lo exija la protección de los intereses esenciales de la seguridad del Estado, la subcontratación requerirá siempre autorización expresa del órgano de contratación.

e) De conformidad con lo establecido en el apartado 4 del Art. 75, de la LCSP, en los contratos de obras, los contratos de servicios o los servicios o trabajos de colocación o instalación en el contexto de un contrato de suministro, los órganos de contratación podrán establecer en los pliegos que determinadas tareas críticas no puedan ser objeto de subcontratación, debiendo ser estas ejecutadas directamente por el contratista principal. La determinación de las tareas críticas deberá ser objeto de justificación en el expediente de contratación.

La infracción de las condiciones establecidas en el apartado anterior para proceder a la subcontratación, así como la falta de acreditación de la aptitud del subcontratista o de las circunstancias determinantes de la situación de emergencia o de las que hacen urgente la subcontratación, tendrá, entre otras previstas en la LCSP, y en función de la repercusión en la ejecución del contrato, alguna de las siguientes consecuencias, cuando así se hubiera previsto en los pliegos:

a) La imposición al contratista de una penalidad de hasta un 50 por 100 del importe del subcontrato.

b) La resolución del contrato, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en el segundo párrafo de la letra f) del apartado 1 del Art. 211, de la LCSP

2.- Los subcontratistas quedarán obligados solo ante el contratista principal que asumirá, por tanto, la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la Administración, con arreglo estricto a los pliegos de cláusulas administrativas particulares o documento descriptivo, y a los términos del contrato, incluido el cumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o laboral a que se refiere el Art. 201, de la LCSP

3.- El conocimiento que tenga la Administración de los subcontratos celebrados en virtud de las comunicaciones a que se refieren las letras b) y c) del apartado 2 del Art. 215 de la LCSP, o la autorización que otorgue en el supuesto previsto en la letra d) de dicho apartado, no alterarán la responsabilidad exclusiva del contratista principal.

4.- En ningún caso podrá concertarse por el contratista la ejecución parcial del contrato con personas inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento jurídico o comprendidas en alguno de los supuestos del Art. 71.

5.- El contratista deberá informar a los representantes de los trabajadores de la subcontratación, de acuerdo con la legislación laboral.

6.- Los subcontratos y los contratos de suministro a que se refieren los Arts. 215 a 217 tendrán en todo



caso naturaleza privada.

- 7.- Sin perjuicio de lo establecido en la disposición adicional quincuagésima primera los subcontratistas no tendrán acción directa frente a la Administración contratante por las obligaciones contraídas con ellos por el contratista como consecuencia de la ejecución del contrato principal y de los subcontratos.

5.- DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES.

5.1.- Abonos al contratista.

El contratista tendrá derecho al abono de la prestación realizada con arreglo al precio convenido y en los términos establecidos en el Art. 198 de la LCSP, en este PCAP y su hoja resumen, en el contrato y en las modificaciones del contrato aprobadas.

El pago del precio podrá hacerse de manera total o parcial, mediante abonos a cuenta o, en el caso de contratos de tracto sucesivo, mediante pago en cada uno de los vencimientos que se hubiesen estipulado, en los términos que figuran en la hoja resumen (HR), de este pliego.

Para el caso de que los servicios se realicen mediante entregas sucesivas de prestaciones, se podrá autorizar la realización de pagos parciales de acuerdo con la HR, de este Pliego.

El pago del precio se efectuará en el plazo establecido en el Art. 198 de la LCSP, y con los efectos que en dicho Art. se determinan, previa conformidad por la Unidad proponente de los servicios realizados por la empresa adjudicataria y de la factura emitida por la misma a nombre la Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales, F.S.P., NIF: G-82354176, previa presentación de las facturas conforme a lo establecido en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el sector público.

En los contratos de tracto sucesivo el responsable del contrato o el representante del Órgano de Contratación, a la vista de los trabajos realmente ejecutados y de los precios contratados, redactará las correspondientes valoraciones con periodicidad mensual o, alternativamente, con la periodicidad que se fije en la hoja resumen (HR), de este pliego.

Las valoraciones se efectuarán siempre al origen, concretándose los trabajos realizados en el período de tiempo que corresponda, dándose trámite de audiencia al contratista, conforme al Art. 149, del RGLCAP.

Los proveedores que hayan prestado servicios o entregado bienes a la Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales, NIF: G-82354176, deberán expedir y remitir facturas electrónicas, conforme a la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura y creación del registro contable de facturas en el sector público.

5.2.- Pagos a subcontratistas y suministradores.

1.- El contratista está obligado a abonar a los subcontratistas o suministradores el precio pactado en los plazos y condiciones que se indican a continuación.

2.- Los plazos fijados no podrán ser más desfavorables que los previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, y se computarán desde la fecha en que tiene lugar la aceptación o verificación de los



bienes o servicios por el contratista principal, siempre que el subcontratista o el suministrador hayan entregado la factura en los plazos legalmente establecidos.

3.- La aceptación deberá efectuarse en un plazo máximo de treinta días desde la entrega de los bienes o la prestación del servicio. Dentro del mismo plazo deberán formularse, en su caso, los motivos de disconformidad a la misma. En el caso de que no se realizase en dicho plazo, se entenderá que se han aceptado los bienes o verificado de conformidad la prestación de los servicios.

4.- El contratista deberá abonar las facturas en el plazo fijado de conformidad con lo previsto en el apartado 2. En caso de demora en el pago, el subcontratista o el suministrador tendrá derecho al cobro de los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

5.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el Art. 69 bis del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, sobre la remisión electrónica de los registros de facturación, los subcontratistas que se encuentren en los supuestos establecidos en el apartado 1 del Art. 4 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso a la factura electrónica y creación del registro contable de facturas del sector público, deberán utilizar en su relación con el contratista principal la factura electrónica, cuando el importe de la misma supere los 5.000 euros, que deberán presentar al contratista principal a través del Registro a que se refiere el apartado 3 de la disposición adicional trigésima segunda, a partir de la fecha prevista en dicha disposición.

En supuestos distintos de los anteriores, será facultativo para los subcontratistas la utilización de la factura electrónica y su presentación en el Registro referido en el apartado 3 de la disposición adicional trigésima segunda.

La cuantía de 5.000,00.- euros se podrá modificar mediante Orden del Ministro de Hacienda y Función Pública.

6.- Los subcontratistas no podrán renunciar válidamente, antes o después de su adquisición, a los derechos que tengan reconocidos por este Art., sin que sea de aplicación a este respecto el Art. 1110 del Código Civil.

5.3.- Condiciones especiales de ejecución del contrato. Obligaciones laborales, sociales y medioambientales.

En los pliegos de cláusulas administrativas particulares se incluirán los criterios de solvencia y adjudicación del contrato; las consideraciones sociales, laborales y ambientales que como criterios de solvencia, de adjudicación o como condiciones especiales de ejecución se establezcan; los pactos y condiciones definidores de los derechos y obligaciones de las partes del contrato; la previsión de cesión del contrato salvo en los casos en que la misma no sea posible de acuerdo con lo establecido en el segundo párrafo del Art. 214.1, de la LCSP; la obligación del adjudicatario de cumplir las condiciones salariales de los trabajadores conforme al Convenio Colectivo sectorial de aplicación; y las demás menciones requeridas por esta Ley y sus normas de desarrollo.

Su incumplimiento o retrasos reiterados en el abono de los salarios o la aplicación de condiciones salariales inferiores a las derivadas de los convenios colectivos, grave y dolosa, dará lugar a la

imposición de penalizaciones a que se refiere el Art. 192, de la LCSP

Los pliegos podrán también especificar si va a exigirse la transferencia de derechos de propiedad intelectual o industrial, sin perjuicio de lo establecido en el Art. 308, respecto de los contratos de servicios.

Además de los derechos y obligaciones generales derivados del régimen jurídico del presente contrato, así como de las condiciones especiales de ejecución del contrato que se recogen en la hoja resumen (HR), se atenderá especialmente a las siguientes obligaciones:

- El personal adscrito a los trabajos dependerá exclusivamente del contratista, el cual tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de empresario respecto del mismo, siendo la Administración del todo ajena a dichas relaciones laborales y sin que a la extinción del contrato pueda producirse, en ningún caso, la consolidación de las personas que hayan realizado los trabajos como personal de la Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales, F.S.P, según dispone el Art. 308, 2, de la LCSP
- El cumplimiento de las medidas recogidas en la Orden PRE/116/2008, de 21 de enero, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros, por el que se aprueba el Plan de Contratación Pública Verde de la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos y las Entidades Gestoras de la Seguridad Social, y en particular las medidas relativas a la utilización de productos de limpieza altamente biodegradables y exentos de sustancias peligrosas, la utilización de papel higiénico y toallas de celulosa reciclados cien por cien (100 %), la utilización de papeleras, contenedores, bolsas de basura y otros recipientes de materiales reciclados cien por cien (100 %), y la recogida separada de residuos y su depósito en puntos limpios.
- El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia fiscal, laboral, de seguridad social, de integración social de personas con discapacidad, de prevención de riesgos laborales y de protección del medio ambiente que se establezcan tanto en la normativa vigente como en los pliegos (PCAP, su HR y el PPT), que rigen la presente contratación y cualesquiera otras de carácter general.
- Asimismo, está obligado al cumplimiento de cuantas normas regulan y desarrollan la relación laboral o de otro tipo, existente entre aquél o entre sus subcontratistas y los trabajadores de uno y otro, sin que pueda repercutir contra la Administración ninguna multa, sanción o cualquier tipo de responsabilidad que, por incumplimiento de alguna de ellas, pudieran imponerle los Organismos competentes.

En cualquier caso, el contratista indemnizará a la Administración de toda cantidad que se viese obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones establecidas en este pliego, aunque ello le venga impuesto por resolución judicial o administrativa.

El incumplimiento por el contratista de estas condiciones especiales de ejecución del contrato, podrá motivar la imposición de penalizaciones que deberán ser proporcionales a la gravedad del incumplimiento y su cuantía no podrá ser superior al diez por ciento (10%), del precio del contrato, en los términos previstos en la hoja resumen (HR), de este PCAP, pudiendo atribuirse a las mismas el carácter de obligaciones esenciales. Cuando el incumplimiento de estas condiciones no se tipifique como causa de resolución del contrato, el mismo podrá ser considerado según la hoja resumen (HR), en los términos reglamentariamente establecidos, como infracción grave a los efectos previstos en el Art. 71.2, c de la LCSP.

El importe de las penalizaciones, vinculadas a la condición especial de ejecución del contrato, se hará

efectivo mediante la deducción de las mismas de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban abonarse al contratista.

El importe total de las penalizaciones en ningún caso será superior al 50%, del precio el contrato

El incumplimiento de esta condición especial de ejecución del contrato, mediando dolo, culpa o negligencia grave, constituirá infracción grave que impedirá al contratista volver a contratar con la administración, a los efectos previstos en el Art. 71, de la LCSP.

5.4.- Seguridad y confidencialidad.

El contratista queda obligado a tratar de forma confidencial y reservada la información recibida, así como a tratar los datos conforme a las instrucciones y condiciones de seguridad que dicte el Órgano de Contratación.

El contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la que se le haya dado el referido carácter o que, por su propia naturaleza, deba ser tratada como tal y estará obligado a guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato, de los que tenga conocimiento con ocasión del mismo, durante la vigencia del contrato, el plazo de garantía y los cinco años posteriores al vencimiento de éste

El contratista no podrá utilizar para sí ni proporcionar a terceros dato alguno de los trabajos contratados ni publicar, total o parcialmente, el contenido de los mismos sin autorización escrita del Órgano de Contratación.

El contratista adquiere, igualmente, el compromiso de la custodia fiel y cuidadosa de la documentación que se le entregue para la realización del trabajo y, con ello, la obligación de que ni la documentación ni la información que ella contiene o a la que acceda como consecuencia del trabajo llegue, en ningún caso, a poder de terceras personas.

El Órgano de Contratación no podrá divulgar la información facilitada por los empresarios que éstos hayan designado como confidencial, carácter que afecta, en particular, a los secretos técnicos o comerciales y a los aspectos confidenciales de las ofertas.

A estos efectos, el contratista podrá designar como confidenciales alguno o algunos de los documentos aportados, circunstancia que deberá reflejarse claramente (sobreimpresa, al margen o de cualquier otra forma), en el propio documento señalado como tal.

El contratista y todo el personal que intervenga en la prestación contractual quedan obligados por lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, y su normativa de desarrollo. Esta obligación seguirá vigente una vez que el contrato haya finalizado o haya sido resuelto.

La infracción de estos deberes por parte del contratista generará, además de responsabilidad contractual, la responsabilidad de índole civil, penal o administrativa que corresponda con arreglo a la legislación vigente. En todo caso, el contratista será responsable de los daños y perjuicios que se deriven del incumplimiento de esta obligación.

5.5.- Revisión de Precios.

Los precios de los contratos del sector público solo podrán ser objeto de revisión periódica y

predeterminada en los términos establecidos en la Subsección 4ª de la Sección 2ª Capítulo II del Título II del Libro II de la LCSP.

Salvo en los contratos no sujetos a regulación armonizada a los que se refiere el apartado 2 del Art. 19 de la LCSP, no cabrá la revisión periódica no predeterminada o no periódica de los precios de los contratos.

Se entenderá por precio cualquier retribución o contraprestación económica del contrato, bien sean abonadas por la Administración o por los usuarios.

Prevía justificación en el expediente y de conformidad con lo previsto en el Real Decreto al que se refieren los Art.s 4 y 5 de la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española, la revisión periódica y predeterminada de precios solo se podrá llevar a cabo en los contratos de obra, en los contratos de suministros de fabricación de armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas, en los contratos de suministro de energía y en aquellos otros contratos en los que el período de recuperación de la inversión sea igual o superior a cinco años. Dicho período se calculará conforme a lo dispuesto en el Real Decreto anteriormente citado.

No se considerarán revisables en ningún caso los costes asociados a las amortizaciones, los costes financieros, los gastos generales o de estructura ni el beneficio industrial. Los costes de mano de obra de los contratos distintos de los de obra, suministro de fabricación de armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas, se revisarán cuando el período de recuperación de la inversión sea igual o superior a cinco años y la intensidad en el uso del factor trabajo sea considerada significativa, de acuerdo con los supuestos y límites establecidos en el Real Decreto.

En los supuestos en que proceda, el órgano de contratación podrá establecer el derecho a revisión periódica y predeterminada de precios y fijará la fórmula de revisión que deba aplicarse, atendiendo a la naturaleza de cada contrato y la estructura y evolución de los costes de las prestaciones del mismo.

El pliego de cláusulas administrativas particulares deberá detallar, en tales casos, la fórmula de revisión aplicable, que será invariable durante la vigencia del contrato y determinará la revisión de precios en cada fecha respecto a la fecha de formalización del contrato, siempre que la formalización se produzca en el plazo de tres meses desde la finalización del plazo de presentación de ofertas, o respecto a la fecha en que termine dicho plazo de tres meses si la formalización se produce con posterioridad.

Salvo en los contratos de suministro de energía, cuando proceda, la revisión periódica y predeterminada de precios en los contratos del sector público tendrá lugar, en los términos establecidos en este Capítulo, cuando el contrato se hubiese ejecutado, al menos, en el 20 por ciento de su importe y hubiesen transcurrido dos años desde su formalización. En consecuencia, el primer 20 por ciento ejecutado y los dos primeros años transcurridos desde la formalización quedarán excluidos de la revisión.

No obstante, la condición relativa al porcentaje de ejecución del contrato no será exigible a efectos de proceder a la revisión periódica y predeterminada en los contratos de concesión de servicios.

Las fórmulas tipo que se establezcan con sujeción a los principios y metodologías contenidos en el Real Decreto antes citado reflejarán la ponderación en el precio del contrato de los componentes básicos de costes relativos al proceso de generación de las prestaciones objeto del mismo.

Los índices elaborados por el INE, reflejarán, al alza o a la baja, las variaciones reales de los precios de la energía y materiales básicos observadas en el mercado y podrán ser únicos para todo el territorio nacional o particularizarse por zonas geográficas. Cuando resulte aplicable la revisión de precios mediante las fórmulas tipo apartado 6 de la, el resultado de aplicar las ponderaciones previstas en el



apartado 7 a los índices de precios, que se determinen conforme al apartado 8, proporcionará en cada fecha, respecto a la fecha y períodos determinados en el apartado 4, un coeficiente que se aplicará a los importes líquidos de las prestaciones realizadas que tengan derecho a revisión a los efectos de calcular el precio que corresponda satisfacer.

Cuando la cláusula de revisión se aplique sobre períodos de tiempo en los que el contratista hubiese incurrido en mora y sin perjuicio de las penalidades que fueren procedentes, los índices de precios que habrán de ser tenidos en cuenta serán aquellos que hubiesen correspondido a las fechas establecidas en el contrato para la realización de la prestación en plazo, salvo que los correspondientes al período real de ejecución produzcan un coeficiente inferior, en cuyo caso se aplicarán estos últimos.

El importe de las revisiones que procedan se hará efectivo, de oficio, mediante el abono o descuento correspondiente en las certificaciones o pagos parciales a cuyo efecto se tramitará a comienzo del ejercicio económico el oportuno expediente de gasto para su cobertura. Los posibles desajustes que se produjeran respecto del expediente de gasto aprobado en el ejercicio, tales como los derivados de diferencias temporales en la aprobación de los índices de precios aplicables al contrato, se podrán hacer efectivos en la certificación final o en la liquidación del contrato.

6.- EXTINCIÓN DEL CONTRATO.

6.1.- Realización de los servicios.

El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de la Administración, la totalidad de la prestación contratada.

A tal efecto, el contratista deberá realizar y entregar, en su caso, los trabajos especificados en este pliego, su hoja resumen y en el pliego de prescripciones técnicas (PPT), dentro del plazo estipulado en el mismo, efectuándose por los representantes del Órgano de Contratación, cuando proceda, un examen de la documentación presentada o de los trabajos realizados.

6.2.- Recepción de las prestaciones o servicios.

La recepción se realizará según lo establecido en los Arts. 210 y 311 de la LCSP, y en el Art. 204, del RGLCAP, en el plazo de un mes contado desde la entrega de los servicios, siempre y cuando éstos sean susceptibles de recepción. En el supuesto de que proceda establecer un plazo especial de recepción o de que sea necesaria una forma particular de recepción, éstos se determinarán en el la hoja resumen (HR), de este PCAP.

6.3.- Plazo de garantía.

Cuando la naturaleza de la prestación lo requiera o la legislación pertinente lo exija, se establecerá un plazo de garantía de aquélla que será el señalado en la hoja resumen (HR), de este PCAP.

Terminado el plazo de garantía sin que la Administración haya formulado reparo o denuncia alguna, el contratista quedará exento de responsabilidad por razón de la prestación efectuada.

6.4.- Devolución y cancelación de la garantía definitiva.

CORREO ELECTRÓNICO

fundacion@funprl.es



- a) La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato de que se trate, o hasta que se declare la resolución de este sin culpa del contratista.
- b) Aprobada la liquidación del contrato y transcurrido el plazo de garantía, si no resultaren responsabilidades se devolverá la garantía constituida o se cancelará el aval o seguro de caución.
- c) El acuerdo de devolución deberá adoptarse y notificarse al interesado en el plazo de dos meses desde la finalización del plazo de garantía. Transcurrido el mismo, la Administración deberá abonar al contratista la cantidad adeudada incrementada con el interés legal del dinero correspondiente al período transcurrido desde el vencimiento del citado plazo hasta la fecha de la devolución de la garantía, si esta no se hubiera hecho efectiva por causa imputable a la Administración.
- d) En el supuesto de recepción parcial solo podrá el contratista solicitar la devolución o cancelación de la parte proporcional de la garantía cuando así se autorice expresamente en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
- e) En los casos de cesión de contratos no se procederá a la devolución o cancelación de la garantía prestada por el cedente hasta que se halle formalmente constituida la del cesionario.
- f) Transcurrido un año desde la fecha de terminación del contrato, y vencido el plazo de garantía, sin que la recepción formal y la liquidación hubiesen tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procederá, sin más demora, a la devolución o cancelación de las garantías una vez depuradas las responsabilidades a que se refiere el Art. 110.

Cuando el valor estimado del contrato sea inferior a 1.000.000,00.- de euros, si se trata de contratos de obras, o a 100.000,00.- euros, en el caso de otros contratos, o cuando las empresas licitadoras reúnan los requisitos de pequeña o mediana empresa, definida según lo establecido en el Reglamento (CE) nº 800/2008, de la Comisión, de 6 de agosto de 2008, por el que se declaran determinadas categorías de ayuda compatibles con el mercado común en aplicación de los Arts. 107 y 108, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y no estén controladas directa o indirectamente por otra empresa que no cumpla tales requisitos, el plazo se reducirá a seis meses.

6.5.- Resolución del contrato.

1.- Son causas de resolución del contrato:

- a) La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extinción de la personalidad jurídica de la sociedad contratista, sin perjuicio de lo previsto en el Art. 98 relativo a la sucesión del contratista.
- b) La declaración de concurso o la declaración de insolvencia en cualquier otro procedimiento.
- c) El mutuo acuerdo entre la Administración y el contratista.
- d) La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista.

En todo caso el retraso injustificado sobre el plan de trabajos establecido en el pliego o en el contrato, en cualquier actividad, por un plazo superior a un tercio del plazo de duración inicial del contrato, incluidas las posibles prórrogas.

- e) La demora en el pago por parte de la Administración por plazo superior al establecido en el



apartado 6 del Art. 198, o el inferior que se hubiese fijado al amparo de su apartado 8.

f) El incumplimiento de la obligación principal del contrato.

Serán, asimismo causas de resolución del contrato, el incumplimiento de las restantes obligaciones esenciales siempre que estas últimas hubiesen sido calificadas como tales en los pliegos o en el correspondiente documento descriptivo, cuando concurran los dos requisitos siguientes:

- 1.- Que las mismas respeten los límites que el apartado 1 del Art. 34, establece para la libertad de pactos.
 - 2.- Que figuren enumeradas de manera precisa, clara e inequívoca en los pliegos o en el documento descriptivo, no siendo admisibles cláusulas de tipo general.
- g) La imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados, cuando no sea posible modificar el contrato conforme a los Art. 204 y 205; o cuando dándose las circunstancias establecidas en el Art. 205, las modificaciones impliquen, aislada o conjuntamente, alteraciones del precio del mismo, en cuantía superior, en más o en menos, al 20 por ciento del precio inicial del contrato, con exclusión del Impuesto sobre el Valor Añadido.
- h) Las que se señalen específicamente para cada categoría de contrato en esta Ley.
- i) El impago, durante la ejecución del contrato, de los salarios por parte del contratista a los trabajadores que estuvieran participando en la misma, o el incumplimiento de las condiciones establecidas en los Convenios colectivos en vigor para estos trabajadores también durante la ejecución del contrato.
- j) En los casos en que concurran diversas causas de resolución del contrato con diferentes efectos en cuanto a las consecuencias económicas de la extinción, deberá atenderse a la que haya aparecido con prioridad en el tiempo.

La resolución del contrato se acordará por el órgano de contratación, de oficio o a instancia del contratista, en su caso, siguiendo el procedimiento que en las normas de desarrollo de esta Ley se establezca, (Art. 212 LCSP).

No obstante lo anterior, la resolución del contrato por la causa a que se refiere la letra i) del Art. 211.1 solo se acordará, con carácter general, a instancia de los representantes de los trabajadores en la empresa contratista; excepto cuando los trabajadores afectados por el impago de salarios sean trabajadores en los que procediera la subrogación de conformidad con el Art. 130, y el importe de los salarios adeudados por la empresa contratista supere el 5 por ciento del precio de adjudicación del contrato, en cuyo caso la resolución podrá ser acordada directamente por el órgano de contratación de oficio.

En los contratos de servicios son causas de resolución, además de las generales, las siguientes:

- a) El desistimiento antes de iniciar la prestación del servicio o la suspensión por causa imputable al órgano de contratación de la iniciación del contrato por plazo superior a cuatro meses a partir de la fecha señalada en el mismo para su comienzo, salvo que en el pliego se señale otro menor.
- b) El desistimiento una vez iniciada la prestación del servicio o la suspensión del contrato por plazo superior a ocho meses acordada por el órgano de contratación, salvo que en el pliego se señale otro menor.
- c) Los contratos complementarios quedarán resueltos, en todo caso, cuando se resuelva el

contrato principal.

- d) La resolución del contrato dará derecho al contratista, en todo caso, a percibir el precio de los estudios, informes, proyectos, trabajos o servicios que efectivamente hubiese realizado con arreglo al contrato y que hubiesen sido recibidos por la Administración.
- e) En los supuestos de resolución previstos en las letras a) y c) del apartado primero del presente Art., el contratista solo tendrá derecho a percibir, por todos los conceptos, una indemnización del 3 por ciento del precio de adjudicación del contrato, IVA excluido.

En los supuestos de resolución contemplados en la letra b) del apartado 1 del presente Art., el contratista tendrá derecho a percibir, por todos los conceptos, el 6 por ciento del precio de adjudicación del contrato de los servicios dejados de prestar en concepto de beneficio industrial, IVA excluido, entendiéndose por servicios dejados de prestar los que resulten de la diferencia entre los reflejados en el contrato primitivo y sus modificaciones aprobadas, y los que hasta la fecha de notificación del desistimiento o de la suspensión se hubieran prestado.

- 2.- La declaración de insolvencia en cualquier procedimiento y las modificaciones del contrato en los casos en que no se den las circunstancias establecidas en los Arts. 204 y 205, darán siempre lugar a la resolución del contrato.

Serán potestativas para la Administración y para el contratista las restantes modificaciones no previstas en el contrato cuando impliquen, aislada o conjuntamente, una alteración en cuantía que exceda del 20 por ciento del precio inicial del contrato, IVA excluido.

En los restantes casos, la resolución podrá instarse por aquella parte a la que no le sea imputable la circunstancia que diera lugar a la misma.

- 3.- Cuando la causa de resolución sea la muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual la Administración podrá acordar la continuación del contrato con sus herederos o sucesores.
- 4.- La resolución por mutuo acuerdo solo podrá tener lugar cuando no concurra otra causa de resolución que sea imputable al contratista, y siempre que razones de interés público hagan innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato.
- 5.- En caso de declaración en concurso la Administración potestativamente continuará el contrato si razones de interés público así lo aconsejan, siempre y cuando el contratista preste las garantías adicionales suficientes para su ejecución.

En todo caso se entenderá que son garantías suficientes:

- a) Una garantía complementaria de al menos un 5 por 100 del precio del contrato, que deberá prestarse en cualquiera de las formas contempladas en el Art. 108.
 - b) El depósito de una cantidad en concepto de fianza, que se realizará de conformidad con lo establecido en el Art. 108.1, letra a), y que quedará constituida como cláusula penal para el caso de incumplimiento por parte del contratista.
- 6.- En el supuesto de demora a que se refiere la letra d) del apartado primero del artículo anterior, si las penalidades a que diere lugar la demora en el cumplimiento del plazo alcanzasen un múltiplo del 5 por ciento del precio del contrato, IVA excluido, se estará a lo dispuesto en el apartado 4 del Art. 193.
 - 7.- El incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato por parte de la Administración originará la resolución de aquel solo en los casos previstos en esta Ley.

8.- Los expedientes de resolución contractual deberán ser instruidos y resueltos en el plazo máximo de ocho meses.

6.6.- Efectos de la resolución del contrato.

Si la resolución se produce por mutuo acuerdo, los derechos de cada una de las partes se acomodarán a lo válidamente estipulado por ellas.

El incumplimiento por parte de la Administración de las obligaciones del contrato determinará para aquella, con carácter general, el pago de los daños y perjuicios que por tal causa se irroguen al contratista.

Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista le será incautada la garantía y deberá, además, indemnizar a la Administración los daños y perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe de la garantía incautada.

Cuando la resolución se acuerde por las causas recogidas en la letra g) del Art. 211, el contratista tendrá derecho a una indemnización del 3 por ciento del importe de la prestación dejada de realizar, salvo que la causa sea imputable al contratista o este rechace la modificación contractual propuesta por la Administración al amparo del Art. 205.

En todo caso el acuerdo de resolución contendrá pronunciamiento expreso acerca de la procedencia o no de la pérdida, devolución o cancelación de la garantía que, en su caso, hubiese sido constituida.

Al tiempo de incoarse el expediente administrativo de resolución del contrato por las causas establecidas en las letras b), d), f) y g) del apartado 1 del Art. 211, podrá iniciarse el procedimiento para la adjudicación del nuevo contrato, si bien la adjudicación de este quedará condicionada a la terminación del expediente de resolución. Se aplicará la tramitación de urgencia a ambos procedimientos.

Hasta que se formalice el nuevo contrato, el contratista quedará obligado, en la forma y con el alcance que determine el órgano de contratación, a adoptar las medidas necesarias por razones de seguridad, o indispensables para evitar un grave trastorno al servicio público o la ruina de lo construido o fabricado. A falta de acuerdo, la retribución del contratista se fijará a instancia de este por el órgano de contratación, una vez concluidos los trabajos y tomando como referencia los precios que sirvieron de base para la celebración del contrato. El contratista podrá impugnar esta decisión ante el órgano de contratación que deberá resolver lo que proceda en el plazo de quince días hábiles.

Cuando el contratista no pueda garantizar las medidas indispensables establecidas en el párrafo anterior, la Administración podrá intervenir garantizando la realización de dichas medidas bien con sus propios medios, bien a través de un contrato con un tercero.

6.7.- Régimen de recursos.

El recurso especial en materia de contratación tiene carácter potestativo, pudiendo presentarse el escrito de interposición en el registro del Órgano de Contratación o del competente para la resolución en el plazo de quince días hábiles, computados conforme a lo dispuesto en el Art. 44, de la LCSP00 previo anuncio por escrito al Órgano de Contratación. La resolución dictada será directamente ejecutiva y sólo cabrá contra la misma interposición del recurso contencioso administrativo.

Los actos del Órgano de Contratación no susceptibles de recurso especial, serán inmediatamente

ejecutivos poniendo fin a la vía administrativa. Contra estas resoluciones podrá interponerse potestativamente recurso potestativo de reposición, regulado en los Arts. 123 Y 124, de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de notificación de la resolución o ser impugnado directamente ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

En el caso de actuaciones realizadas por poderes adjudicadores que no tengan la condición de Administraciones Públicas, aquellas se impugnarán en vía administrativa de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas ante el titular del departamento, órgano, ente u organismo al que esté adscrita la entidad contratante o al que corresponda su tutela. (Recurso de alzada impropio).

El presente modelo de Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, ha sido informado por la Abogacía del Estado en el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, con número de referencia PA1 /2018, de fecha 04 de Julio de 2018

**EL DIRECTOR DE LA FUNDACIÓN ESTATAL
PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, F.S.P.**



D. Gregorio Tudela Cambrónero